



EL ELN Y LA INDUSTRIA PETROLERA: ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA EN ARAUCA

Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz
Abril de 2015

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es estudiar la relación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el sector de hidrocarburos en Arauca, por medio del análisis de los ataques a la infraestructura petrolera que este grupo guerrillero ha cometido en el departamento. Se sostiene que los ataques a la infraestructura petrolera no responden únicamente a las motivaciones económicas del ELN, sino también a objetivos sociopolíticos y tácticas militares. En la actualidad, los propósitos de esta guerrilla, detrás de los ataques, se concentran no solo en presionar el pago de extorsiones, sino también en posicionar su agenda frente a la explotación de hidrocarburos, incrementar su apoyo social y demostrar poderío militar para fortalecer su posición ante una posible negociación de paz.

El caso de Arauca ilustra claramente la relación entre las múltiples motivaciones del ELN y los ataques a la infraestructura petrolera, debido a que es la zona del país más afectada por este tipo de acciones¹. Igualmente es donde se concentra la estructura más fuerte del ELN (el frente Domingo Laín), y su accionar se ha articulado de manera clara al sector de hidrocarburos. En la actualidad, el ELN ha retomado varias de las estrategias que caracterizaron a la agrupación en periodos anteriores, ubicándola nuevamente como el grupo predominante en Arauca.

Pero debido al desprestigio de esta guerrilla después de la violenta disputa con las FARC entre 2005 y 2010, y a los largos años de conflicto que han vivido los araucanos, el ELN ya no cuenta con la misma influencia sociopolítica de antes. Una de las consecuencias de lo anterior es que no ha logrado recuperar cuotas en la política local y regional que le permitan acceder a los recursos provenientes de las regalías petroleras. Esto la ha llevado a incrementar la presión sobre el sector petrolero para la obtención de recursos por medio de extorsiones y secuestros y el aumento de ataques a los oleoductos.

¹ Según la Base de Datos del Conflicto FIP, entre 1986 y 2013 Arauca fue el departamento que registró el mayor número de ataques a la infraestructura petrolera realizados por el ELN, concentrando el 34,7% del total de hechos.

De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta que al menos dos ideas principales serán transversales a todo el documento. En primer lugar, en el estudio de la economía política de la guerra en Colombia se ha evidenciado que la explotación de hidrocarburos ha sido una importante fuente de financiación de los actores armados ilegales, además del narcotráfico. En segundo lugar, el ELN, las FARC, las AUC y las bandas criminales se han nutrido de diferentes maneras del sector de hidrocarburos mediante la extorsión, pagos por seguridad y la captación ilegal de regalías. Sin embargo, el ELN es el grupo que más se ha beneficiado de la economía petrolera y el que ha articulado a su agenda, de manera más clara, el sector petrolero, por ende, el que más ha recurrido a los atentados a la infraestructura petrolera.

Para elaborar este documento se hizo una revisión bibliográfica sobre el tema, se usó la Base de Datos del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, cifras de Ecopetrol sobre ataques a la infraestructura petrolera, y reportes de organizaciones humanitarias y de prensa sobre acciones violentas y su impacto social y medioambiental. De igual manera, se entrevistaron empleados del sector de hidrocarburos, al igual que integrantes de la fuerza pública y especialistas en economías lícitas y actores armados ilegales. También se recogió más información en la región y se entrevistaron a funcionarios públicos, integrantes de la fuerza pública, miembros de organizaciones humanitarias y líderes sociales y comunitarios del departamento².

El documento está compuesto de cuatro partes. En la primera parte se hace una breve revisión de literatura sobre la relación entre recursos y conflicto armado, la relación entre petróleo y conflicto armado en Colombia y los ataques a la infraestructura petrolera. En la segunda se discute cómo el conflicto armado se va insertando en la historia del sector petrolero del país, específicamente, a través del caso del ELN. En la tercera se estudia la relación entre el ELN y los ataques a la infraestructura petrolera en Arauca. Esta parte se divide en cuatro secciones: (i) la historia del ELN en Arauca y la manera en que articula al sector petrolero en múltiples dimensiones de su agenda, (ii) las dinámicas actuales del accionar del ELN en Arauca y su relación con otros actores legales e ilegales, (iii) la historia de la relación entre el Estado, las empresas petroleras y la población en Arauca, (iv) las tendencias y motivaciones de los ataques a la infraestructura petrolera en Arauca y su relación con el ELN, (v) y el impacto social, ambiental y que sobre la industria de hidrocarburos tienen los ataques a la infraestructura petrolera.

Finalmente, teniendo en cuenta que los atentados contra la infraestructura petrolera producen impactos económicos, sociales y ambientales, se genera la necesidad de implementar protocolos y procedimientos que permitan prevenir la ocurrencia de estos hechos, pero también la mitigación de los daños causados, en la medida en que los atentados contra los oleoductos se siguen presentando. De acuerdo con esto, en la cuarta parte se hace referencia, por un lado, a las medidas de prevención institucional y de las empresas frente a la ocurrencia de los ataques. Por el otro lado, a las medidas de mitigación de los daños causados por el derrame de crudo.

² El viaje al municipio de Arauca fue realizado entre el 19 y el 23 de enero de 2015.

1. RELACIÓN ENTRE RECURSOS Y CONFLICTO ARMADO

La literatura académica³ sobre economía política de los conflictos armados ha tratado de explicar la relación entre recursos y el origen y la duración de la confrontación armada, identificando, al menos, dos enfoques. El primero se centra en explicar las guerras bajo la racionalidad económica de los actores. En este enfoque la confrontación armada se explica en la medida en que se desarrolla una competencia por la apropiación de los recursos, es decir, son el objetivo que buscan los actores en la confrontación. Esto llevaría a entender a los recursos como un fin en sí mismo.

Autores como Paul Collier y Anke Hoeffler plantean la depredación de las rentas, provenientes de los recursos, como condición que posibilita el surgimiento y la permanencia de los grupos armados. A su vez, el conflicto puede explicarse, ya sea por codicia (*greed*) o por agravios (*grievances*), como los sentimientos de marginación étnica o política⁴. Además, concluyen que para entender las causas de las guerras civiles contemporáneas el análisis debe centrarse en la codicia de los rebeldes y, sobre todo, en el comercio de recursos naturales⁵.

A esto se añade la posición de Mark Duffield. Para Duffield la economía actual de los conflictos se basa en el desarrollo de economías asentadas en la depredación de recursos, como la explotación y comercialización de recursos naturales. Así mismo, la utilización de economías ilegales (como el tráfico de drogas y armas) permiten la perdurabilidad de la violencia e incluso se convierten en el motor y causa del conflicto⁶. Por su parte, Mary Kaldor y Herfried Münkler, en su teoría sobre “las viejas y nuevas guerras”, establecen que las guerras contemporáneas son producto de la lucha por el control de los recursos y la población⁷. En este sentido, destacan que la presencia de recursos naturales no favorece un desarrollo económico autónomo, sino la generación de conflictos armados en torno a la apropiación y la distribución de tales riquezas⁸.

A diferencia de lo anterior, en el segundo enfoque, si bien los recursos naturales son una variable importante dentro de los conflictos armados, no los explica en su totalidad. Este enfoque parte de la idea de que la depredación de los recursos se convierte en un medio que les permite a los rebeldes acceder a un objetivo mayor, es decir no son un fin en sí mismo. Esta perspectiva critica el excesivo énfasis económico del origen de las guerras y el hecho de reducir la disputa entre actores a una racionalidad exclusivamente económica.

³ La revisión de literatura sobre la economía política de la guerra se hizo tomando como punto de partida a Teófilo Vásquez en su artículo “Recursos, política, territorios y conflicto armado”, publicado en: “Una vieja guerra en un nuevo contexto: Conflicto y territorio en el sur de Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana”.

⁴ Collier, Paul y Hoeffler, Anke (2004). *Greed and Grievance in civil war*. Oxford Economic Papers, No. 56. pp. 563-595. Disponible en <http://www.econ.nyu.edu/user/debraj/Courses/Readings/CollierHoeffler.pdf>; Collier, Paul y Hoeffler, Anke (2005). *Resource Rents, Governance, and Conflict*. *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49 No. 4. Agosto de 2005. pp. 625-633

⁵ Humphreys, Macartan (2005). *Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms*. *Journal of Conflict Resolution*, No. 49 No. 4 de Agosto de 2005. pp. 508-537

⁶ Duffield, M. (2001). *Global governance and the new wars: the merging of development and security*. Londres: Zed Books Ltd.

⁷ Kaldor, M. (2001). *Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global*. Barcelona, España: Tusquets Editores, S.A.; Münkler, Herfried (2005). *Viejas y Nuevas Guerras: asimetría y privatización de la violencia*. Madrid: Siglo XXI

⁸ Münkler, Herfried (2005). Op. cit.

Esta postura sostiene que “no existe necesariamente una relación y una convergencia inexorable entre los recursos naturales saqueables y el desarrollo de los conflictos”⁹. Por lo tanto, para estudiarlos se deben analizar otros factores que inciden en el desencadenamiento de la violencia armada, como los institucionales, políticos y sociales¹⁰. En este sentido, para Stathis Kalyvas la guerra no puede ser reductible a dicotomías entre lo político y lo económico, por lo que insiste en la necesidad de observar las lógicas de la violencia, las interacciones entre grupos armados y la población civil, y la dimensión local y regional del conflicto. Es decir, entender la capacidad de los actores armados para lograr o no adhesiones o identidades en las comunidades y poblaciones donde actúan¹¹.

Sumado a lo anterior, Charles Tilly concuerda en que los recursos no generan conflictos por sí solos y añade la necesidad de entender el origen de estos mediante el análisis de los actores y sus interacciones, los contextos y el régimen político desde una perspectiva histórica¹². Teófilo Vásquez, siguiendo a Tilly, plantea que los recursos en sí mismos no conllevan necesariamente a la confrontación armada, sino que su persistencia y evolución son los factores generadores de la apropiación de los recursos por parte de los actores¹³.

Philippe Le Billon, en su teoría sobre la ecología política del conflicto, añade que la disponibilidad de cualquier recurso no es, en sí mismo, un indicador predictivo de conflicto. Por lo tanto, se requiere concentrarse en el análisis de los recursos como procesos históricos de transformación dialéctica de la naturaleza y de los grupos sociales. Destaca, igualmente, que aunque los recursos pueden influir significativamente en la probabilidad y el curso de las guerras, también las necesidades y prácticas de los actores en los conflictos armados intervienen en el patrón de la explotación de los recursos y la situación del medio ambiente¹⁴.

Ahora bien, este segundo enfoque, que busca entender los recursos como un medio y no como fin en sí mismo, da mayores herramientas para analizar la relación entre actores, recursos y el conflicto armado colombiano. En este sentido, si bien es cierto que los recursos han sido un elemento fundamental en el mantenimiento de la confrontación armada, esto no explica el conflicto en su totalidad ni los intereses y racionalidades de los actores; se entenderían como un instrumento para alcanzar otros objetivos. De acuerdo con lo anterior, como señala Teófilo Vásquez, “la economía de las drogas les ha permitido simple y sencillamente, la obtención de mayores recursos para financiar el crecimiento numérico de sus Ejércitos y la mejora sustancial de su infraestructura militar”¹⁵, elementos necesarios para mantener la guerra. Lo anterior apunta a demostrar que los recursos dentro de la racionalidad de los actores armados en Colombia tienen objetivos más allá del simple interés codicioso de enriquecimiento.

⁹ Snyder, Richard (2006). “Does Lootable Wealth Breed Disorder? A Political Economy of Extraction Framework.” *Comparative Political Studies* 39, No. 8. pp. 943-968.

¹⁰ Le Billon, Philippe (2001). The political ecology of war: natural resources and armed conflicts. *Political Geography*, No. 20. 2001

¹¹ Kalyvas (2001a, 2006 y 2008) citado en Vásquez, Teófilo (2011). “Recursos, política, territorios y conflicto armado”. En: Una vieja guerra en un nuevo contexto: Conflicto y territorio en el sur de Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. pp. 376-379

¹² Tilly (2007), citado en Vásquez, Teófilo (2011). Op. cit. pp. 379-382

¹³ Vásquez, Teófilo (2011). “Recursos, política, territorios y conflicto armado”. En: Una Vieja Guerra En Un Nuevo Contexto: Conflicto Y Territorio En El Sur De Colombia. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. pp. 367-428

¹⁴ Le Billon, Philippe. Political ecology of war: natural resources and armed conflicts. *Political Geography*, No.20. 2001

¹⁵ Vásquez, Teófilo (2011). Op. cit. p.

Como argumenta Le Billon, el aumento en la importancia de los recursos para los actores armados conlleva a que las actividades militares se concentren en áreas de importancia económica. Esto tiene un efecto crítico sobre la ubicación de los conflictos y provoca la ubicación de grupos ilegales en zonas donde se encuentran los recursos y las rutas de transporte¹⁶. En Colombia, para Leiteritz, Nasi y Rettberg, una de las principales motivaciones para la presencia de actores ilegales en una región es el saqueo del recurso o de sus beneficios o la extorsión de propietarios y productores¹⁷. Esta motivación, cabe aclarar, debe entenderse más allá de una lógica netamente económica, debido a que los actores necesitan perpetuarse y prosperar, es decir, acumular recursos, ganar influencia y prestigio, expandirse en el espacio y aumentar el número de miembros o seguidores¹⁸.

Asimismo, estos autores observan que en regiones del país “los actores ilegales saquean los recursos pero el saqueo no es la motivación principal ni inicial de su presencia. Pese a que el recurso en sí no produjo la llegada de los actores ilegales, de todas formas éste contribuye a la prolongación del conflicto”¹⁹. De acuerdo con lo anterior, la racionalidad de los grupos armados y su ubicación en el territorio no solo están determinadas por la variable económica, sino por diversas condiciones políticas y sociales que le dan viabilidad a la lucha armada, como ya se ha advertido en líneas anteriores.

1.1 La relación entre petróleo y el conflicto armado en Colombia

El conflicto armado colombiano suele asociarse con la presencia del narcotráfico. Sin embargo, existe una amplia literatura sobre la relación entre disponibilidad de recursos lícitos, como el petróleo, y la presencia y perdurabilidad de los actores armados ilegales. El petróleo es uno de los casos más emblemáticos y más comúnmente estudiados en términos de la relación entre la guerra y los recursos²⁰. En este caso, si se superpone el mapa de los hidrocarburos y el del conflicto armado, se observa la concordancia entre los territorios que “incluyen los polos clave como escenarios de guerra o de agudos enfrentamientos armados con activa intervención de la fuerza pública, fuerzas paramilitares y guerrillas”²¹.

En esta relación entre grupos armados y recursos, dado que el petróleo no es un bien saqueable como lo pueden ser los diamantes, el incentivo de los actores ilegales no es el control de la producción, sino el control de quienes lo producen. Por esta razón, los actores armados ilegales han desarrollado sofisticados sistemas para captar recursos petroleros mediante el control de los partidos políticos, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y el uso de la coacción selectiva de la producción²². Esta clase de sistemas de apropiación se han creado porque, como señala Le

¹⁶ Le Billon, Philippe (2001). The political ecology of war: natural resources and armed conflicts. *Political Geography*, No. 20. 2001. p. 9

¹⁷ Leiteritz, Ralf; Nasi, Carlo y Rettberg, Angelika (2009). Para desvincular los recursos naturales del conflicto armado en Colombia: Recomendaciones para formuladores de política y activistas. *Revista Colombia Internacional No. 70*. Julio-diciembre de 2009. pp. 215-229

¹⁸ Peñate, Andrés (1998). El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado. Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Documento de Trabajo No. 15.

¹⁹ Leiteritz, Ralf; Nasi, Carlo y Rettberg, Angelika (2009). Op. cit. p. 220

²⁰ Rettberg, Angelika; Leiteritz, Ralf; y Nasi, Carlo (2014). Different Resources, Different Conflicts? A Framework for Understanding the Political Economy of Armed Conflict and Criminality in Colombian Regions. 22 de septiembre de 2014. Disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2499580

²¹ González Posso, Camilo (2011). Petróleo y Transformación de Conflictos. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Bogotá, Colombia. Enero de 2011.

²² González Posso, Camilo (2011). Op. cit.

Billon, la saqueabilidad del petróleo requiere una estructura más cohesionada, organizativa y compleja²³. Con referencia a lo anterior, las condiciones de fragilidad institucional y social de los lugares (regiones y municipios) donde se extraen los hidrocarburos y, por lo tanto, reciben regalías, generan una estructura de oportunidad para que los grupos armados ilegales se apropien de los recursos. En este contexto, las regalías configuran un botín de fácil acceso para los actores ilegales quienes en ocasiones se configuran como una institucionalidad paralela.

En Colombia, la relación entre petróleo y grupos armados ilegales se ha presentado desde los años setenta, década donde se inició el proceso de desarrollo guerrillero en el país. Durante estos años, varias empresas del sector petrolero empezaron a ser víctimas de extorsión por parte de los grupos guerrilleros²⁴, principalmente del ELN. Las guerrillas buscaban financiar su lucha revolucionaria y articular su discurso ideológico a las realidades de los territorios donde se estaban consolidando. No se debe olvidar que el ELN, desde sus primeros años, estuvo relacionado con las problemáticas adscritas a la explotación y el modelo de contrato petrolero.

De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que el sector extractivo es afectado por los actores armados ilegales en dos dimensiones, la *directa* y la *indirecta*. La *directa* se refiere a las acciones de los grupos armados ilegales para afectar la operación y funcionamiento de las empresas del sector. En este caso, se observan, en primer lugar, atentados o ataques contra los empleados, contratistas y terceros asociados, y/o contra la infraestructura petrolera. Y en segundo lugar, la extorsión directa a las empresas o a empleados, contratistas y terceros asociados²⁵.

Frente a la extorsión, los actores armados ilegales piden grandes sumas de dinero a las empresas o a los contratistas que trabajan en terreno a cambio de protegerlos (puede ser frente a otro actor armado o de sí mismo), permitirles trabajar y movilizarse, y transportar los insumos necesarios para su funcionamiento. De esta forma, con el pago de la extorsión se evitan ser objeto de ataques contra empleados, contratistas y la infraestructura, acciones que pueden alterar negativamente el funcionamiento de las empresas en su producción, transporte y/o comercialización del petróleo²⁶.

En este sentido, el pago de la extorsión está estrechamente relacionado con la percepción de seguridad de las empresas, en la medida en que “las cuotas extorsivas, presionadas o relativamente voluntarias, transmiten un mensaje de garantía de seguridad frente a acciones violentas de otros grupos ilegales o de ellos mismos, en tanto se pague regularmente la cuota

²³ Le Billon, Philippe (2001). Op. cit.

²⁴ Massé, Frédéric y Camargo, Johanna (2012). Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia. CITpax Colombia. V informe 2012.

²⁵ Si bien los casos más visibles de afectación a la industria petrolera en el país han sido el del ELN y las FARC, Carlos Castaño habría declarado en medios de prensa que los paramilitares también le cobraron un impuesto a las multinacionales, como lo hacían las guerrillas, a cambio de protección. En el caso de la construcción del oleoducto de Orensa, se habló de vínculos entre los paramilitares, la British Petroleum, el Ejército y empresas de seguridad extranjeras. Además, los paramilitares habrían elaborado una estrategia para robar gasolina haciendo huecos al oleoducto, lo que le generó costos cercanos a los \$5 millones por mes a Ecopetrol, la cual vendían a precios más bajos que el mercado. Los paramilitares también se habrían visto beneficiados captando rentas de los contratos de construcción en las zonas petroleras, lo que les permitía empoderarse de zonas estratégicas. Con esto también lograban disminuir las ganancias de las guerrillas por este canal y disminuir su presencia y autonomía territorial (ver más en: Dunning, Thad and Wirspa, Leslie. Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia and Beyond: A Linkages Approach. Geopolitics, vol. 9, no. 1 (Spring 2004) pp. 81-108).

²⁶ Ibid.

correspondiente al grupo armado ilegal²⁷. En parte, por esto, es que la industria extractiva ha reestructurado su forma de operar, ya no llevando a cabo grandes operaciones en el territorio, sino subcontratando a otras empresas para realizar una determinada labor (*outsourcing*). Lo anterior ha generado un mayor impacto de la extorsión en los contratistas y que las amenazas y extorsiones se hayan vuelto más discretas²⁸.

La segunda forma de afectación, la *indirecta*, se refiere a las acciones de los actores ilegales que no afectan la operación de la empresa, pero sí a su entorno y financian indirectamente a los actores armados ilegales. Concretamente, la captación ilegal de regalías por parte de estos grupos es un fenómeno recurrente en zonas de producción petrolera, lo que es habitual en países con graves y prolongados conflictos armados como Colombia, en el que grandes inversiones en industria extractiva generan competencias por rentas y riquezas que involucran a grupos ilegales y mafias²⁹.

En el caso del petróleo, los actores ilegales han construido un sofisticado mecanismo de saqueo de regalías, luego que las compañías reestructuraron exitosamente sus operaciones y desarrollaron distintos esquemas de protección públicos y privados³⁰. En este sentido, el uso de ciertos niveles y sectores de la administración pública y de élites políticas regionales que controlan y asignan las regalías en municipios productores (por ejemplo, mediante la emisión de contratos de prestación de la asistencia sanitaria) y la instrumentalización de los presupuestos públicos, son las formas como los actores ilegales se están financiando con los recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos³¹.

Atentados contra la infraestructura petrolera en Colombia

Los grupos armados ilegales interactúan con sector de hidrocarburos a través de secuestros, atentados contra empleados y contratistas, y la extorsión. Sin embargo, los ataques contra la infraestructura petrolera son los que cobran mayor importancia para los actores ilegales, principalmente, las guerrillas de las FARC y el ELN. Como ya se mencionó, detrás de la relación de los grupos armados con los recursos no solo hay una intención económica. En esta investigación se identificaron tres dimensiones o motivaciones detrás de este tipo de acciones en el país³²:

1. **Económica:** Los ataques contra la infraestructura tienen un innegable interés en la obtención de recursos. Ejemplo de esto es la extorsión, por medio de la cual los actores ilegales tienen un marcado interés en presionar a las compañías, contratistas y terceros asociados. Los atentados en contra de la infraestructura son, entonces, “la estrategia que complementa, o mejor, ‘castiga’ el no pago de las cuotas extorsivas”³³. Frente a este aspecto, de las entrevistas realizadas se puede deducir que la necesidad de aumentar las finanzas de los actores ilegales

²⁷ Massé, Frédéric y Camargo, Johanna (2013). Actores armados ilegales y sector petrolero del Meta. CITpax Colombia. Informe monográfico 2013.

²⁸ Entrevista realizada en Bogotá el 4 de diciembre de 2014.

²⁹ González Posso, Camilo (2011). Op. cit. p. 35

³⁰ Leiteritz, Ralf; Nasi, Carlo y Rettberg, Angelika (2009). Op. cit.

³¹ Indepaz (2013) Op. cit. y Rettberg, Angelika; Leiteritz, Ralf; y Nasi, Carlo (2014). Op. cit.

³² Si bien durante la investigación se encontraron estas motivaciones, a la hora de analizar un ataque contra la infraestructura petrolera no es fácilmente identificable el motivo de esta acción, debido a que un atentado de este tipo puede contener diferentes propósitos y producir diversos resultados.

³³ Massé, Frédéric y Camargo Johanna (2013). Op. cit.

puede explicar un incremento en los ataques (para presionar el pago de extorsiones) y la disminución estaría relacionada con el continuo pago por parte de las empresas³⁴.

2. **Sociopolítica:** Las estructuras guerrilleras, principalmente el ELN³⁵, han construido un fuerte discurso en contra de la explotación de hidrocarburos por parte de empresas multinacionales. Por eso, los ataques a la infraestructura tienen el objetivo de reivindicar sus consignas políticas donde “es consecuente con un supuesto contenido ‘ideológico’ de la guerrilla, en tanto se trataría de acciones de lucha contra la llegada de empresas transnacionales y la vulneración de la soberanía nacional, representados en la operación de los grandes proyectos petroleros”³⁶.

Asimismo, los ataques contra la infraestructura petrolera tienen el propósito de afectar la economía y aprovechar las dificultades de la política minero-energética del gobierno nacional³⁷. Con esto también buscan fortalecer sus bases sociales en la medida en que sus acciones respaldan la resistencia de las comunidades a la explotación de estos recursos. Un ejemplo claro, como se verá más adelante, es el caso del ELN en Arauca.

La voladura de oleoductos también es otra forma a la que apelan los grupos guerrilleros para difundir su discurso político y mostrarse como partes relevantes dentro del conflicto armado. Como lo señala Andrés Peñate, “así como un actor necesita de un público, el ELN necesita para sobrevivir ser percibido (y tratado) como un personaje por una audiencia relevante; entre más importante la audiencia mucho mejor”, por ende, esta guerrilla ha utilizado la voladura sistemática de oleoductos como una forma de conseguir audiencia³⁸.

En relación al párrafo anterior, es evidente que hoy los atentados a la infraestructura están relacionados con el fortalecimiento de la posición de las guerrillas para una negociación con el gobierno. Por consiguiente, el aumento de las acciones coincide con el inicio de las conversaciones y acercamientos del gobierno con las FARC, y desde 2014 con el ELN, y su disminución, a los resultados y el avance del acercamiento entre las partes.

3. **Militar:** Esta motivación explica diversos intereses de los grupos guerrilleros para atentar contra la infraestructura petrolera. En primer lugar, las guerrillas ven en estos atentados una forma de mostrar fortalecimiento militar y con capacidad de afectación, así este tipo de acciones requieran de un bajo esfuerzo en el plano militar y logístico. “Buena parte de las acciones del ELN en el 2013 se dirigen al sabotaje del sector extractivo, con lo que pretenden

³⁴ Entrevistas realizadas en Arauca entre el 19 y 23 de enero de 2015.

³⁵ El ELN ha dejado muy clara su posición frente a la explotación de hidrocarburos y que las acciones militares son un medio para presionar al gobierno y las compañías, como lo muestran fragmentos de un comunicado de esta agrupación guerrillera en su portal web: “La campaña ‘Despierta Colombia, nos están robando el petróleo’, con la cual propagandizamos nuestras ideas y propuestas y denunciarnos el saqueo del crudo por parte de las multinacionales. (...) Hemos hablado de muchas formas convocando la conciencia de los colombianos, golpeando los intereses de las multinacionales que saquean el patrimonio nacional y exigiendo al Estado la defensa de la soberanía nacional y una política petrolera y energética. (...) Hemos lanzado propuestas políticas para la reactivación de un vigoroso movimiento para la soberanía y la autodeterminación nacional, acompañadas de un incremento de nuestro accionar militar sobre estas compañías”. [Ejército de Liberación Nacional -ELN- (1998). Recursos naturales: por la soberanía y la defensa de los recursos naturales. Disponible en <https://www.ELN-voces.com/j15/webanterior/Documentos/CM/1998/CM94.html>]

³⁶ Entrevistas realizadas en Arauca entre el 19 y 23 de enero de 2015.

³⁷ Fundación Paz y Reconciliación -PARES- (2013a). ¿Cómo llega el ELN a la mesa de negociación? Informe de Investigación y Seguimiento a las acciones del Ejército de Liberación Nacional – ELN. Disponible en <http://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2013/12/Informe-ELN-20131.pdf>

³⁸ Peñate, Andrés (1998). Op. cit. p. 10

mostrar que tienen capacidad de afectar este región de la economía al tiempo que echan su discurso de soberanía y defensa del territorio nacional”, se lee en un informe de la Fundación Paz y Reconciliación³⁹. En este sentido, una acción puede contener en sí misma diferentes intereses, tales como mostrarse capaz militarmente, mantener su discurso ideológico y buscar apoyo popular.

En segundo lugar, este tipo de acciones tienen implicaciones en la estrategia militar de las guerrillas. De las entrevistas se puede inferir que sirven para que la fuerza pública desplace tropa a los lugares donde se ha hecho el atentado, dejando así, territorios con déficit de presencia militar, principalmente en las zonas rurales⁴⁰. Asimismo, la voladura de los oleoductos es utilizada para disminuir la desventaja militar de las guerrillas frente a la fuerza pública, poniendo artefactos explosivos cerca de donde fue volado el tubo para accionarlos una vez entre la fuerza pública a asegurar la zona. De la misma forma, los grupos guerrilleros recurren a francotiradores y a la siembra de minas cerca al oleoducto para atentar contra las unidades del Ejército que patrullan y acompañan el proceso de reconstrucción.

2. EL ELN Y LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN COLOMBIA

Periodo	La industria petrolera en Colombia	Posición del ELN
1920-1970's	<p>Durante las primeras etapas de crecimiento de la industria petrolera, el gobierno estableció un contrato de Concesión para la explotación de crudo, modelo que enmarcó los primeros contratos de explotación en Colombia. Hasta los años 40, la explotación de hidrocarburos fue de carácter privado, lo que cambió con la creación de Ecopetrol, pasando a ser en promedio un 75% privada y un 25% del Estado en los años 50⁴¹.</p> <p>Bajo este contexto, en 1963 se dio una huelga en la que participaron obreros de Ecopetrol y campesinos de San Vicente del Chucurí, El Carmen y Barrancabermeja. Fue en contra de la extranjerización de la explotación, del robo de petróleo y de los bajos precios que le pagaban a los campesinos por comprarles tierras donde se descubrían pozos petroleros⁴².</p>	<p>El ELN se involucró con el tema de la explotación petrolera desde su origen, bajo la coyuntura de las huelgas de 1963. Los integrantes del grupo guerrillero aprovecharon la movilización para brindar apoyo a los manifestantes. Además, apoyar esta lucha tenía sentido para la naciente organización en tanto que se enmarcaba dentro del discurso nacionalista y antiimperialista que la caracterizó desde sus inicios⁴³.</p> <p>En 1965, el ELN realizó el primer atentado a la infraestructura petrolera, con el ataque a un oleoducto de la compañía <i>Cities Services Intercol</i>, cerca de Barrancabermeja. Este hecho vino acompañado de la primera postura ideológica frente al tema, presentada por el sacerdote Camilo Torres en la plataforma del Frente Unido⁴⁴ en ese mismo año, en un texto en el que se buscaba unificar en objetivos concretos a los sectores populares colombianos. Sobre lo relacionado a los recursos naturales y el petróleo se planteaba que su explotación se debía nacionalizar e imponer condiciones para las concesiones a compañías extranjeras⁴⁵.</p>

³⁹ Núñez, Magda P. y Vargas, Naryi (2013). ¿Cómo llega el ELN a la mesa de negociaciones? Fundación Paz y Reconciliación. Disponible en <http://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2013/12/Informe-ELN-20131.pdf>

⁴⁰ Fundación Paz y Reconciliación (2013b). Cómo es eso de negociar en medio del conflicto. La guerra de las FARC en 2013. Disponible en <http://www.pares.com.co/wp-content/uploads/2013/12/Informe-FARC-2013.pdf>

⁴¹ Cifras tomadas de Ecopetrol.

⁴² Medina Gallego, Carlos. ELN: una historia contada a dos voces. Entrevista con ‘el cura’ Manuel Pérez y Nicolás Rodríguez Bautista, ‘Gabino’. Rodríguez editores: Bogotá, 1996.

⁴³ Medina Gallego, Carlos, Op. Cit.

⁴⁴ El Frente Unido fue un movimiento político y social creado por Camilo Torres, que se oponía al sistema y al proceso electoral, y que operó como “brazo político” del ELN antes de que su creador se alistara a las filas guerrilleras.

⁴⁵ En el texto de Camilo Torres se lee lo siguiente en referencia a la explotación petrolera: *La propiedad del subsuelo será del Estado y la explotación del petróleo se hará por su cuenta para fines de servir la economía nacional. No se darán concesiones petroleras a compañías extranjeras y sino con las condiciones siguientes: a) que la participación del Estado no sea inferior al 70%; b) que la refinanciación, distribución y producción de los combustibles sean servicios públicos bajo su control; c) devolución al Estado de las empresas, equipos e instalaciones gratuitamente, a más tardar a los 25 años; d) los salarios de obreros y empleados colombianos serán por lo menos iguales a los de los extranjeros de la misma categoría* (ver más en: Arenas, Jaime. *ELN la guerrilla por dentro*. Icono Editorial: Bogotá, 2009).

1980's	<p>En 1983, la multinacional Occidental Petroleum (OXY) descubre los yacimientos de Caño Limón y Cravo Norte en Arauca, lo que conduce a la construcción del oleoducto Caño Limón–Coveñas, que inició a operar en 1985. Esto genera un incremento de la producción petrolera del 41,5%. Colombia deja de importar crudo y las exportaciones de hidrocarburos y derivados pasan de aportar el 3% de las ganancias del total de las exportaciones del país en 1980 al 25% en 1989.</p>	<p>La construcción del oleoducto fue fundamental para la proyección y fortalecimiento político, militar y económico del ELN⁴⁶, después de haber estado muy débil tras el ataque de Anorí en 1973. Durante y después de la construcción del oleoducto, el frente Domingo Laín recauda importantes cantidades de dinero por medio de extorsiones y secuestros cobrados a las empresas asociadas a la industria petrolera⁴⁷. En el caso de los pagos realizados por la empresa alemana Mannesmann, encargada de construir el oleoducto Caño Limón – Coveñas, se han estimado cálculos que van desde los 300 millones de dólares⁴⁸. Por la liberación del ingeniero Werner Schoodt en 1984 se ha dicho que la empresa le pagó un total de 2 millones de dólares⁴⁹.</p> <p>Paralelo a lo anterior, la organización guerrillera fue integrando su propuesta petrolera a una idea de modelo de desarrollo bajo el cual se proponía que la renta que generan los hidrocarburos se debía invertir en bienestar para la población civil⁵⁰. En línea con esto, la organización le presenta una propuesta al gobierno en 1987 en la que se le da gran importancia a la participación popular en la resolución de los destinos de los recursos naturales por medio de una Junta Popular, y se plantea una posición en contra de los contratos de concesión y de los contratos de asociación, argumentando que la mayor parte de los beneficios se los llevan las transnacionales y la totalidad de los riesgos los asume el Estado colombiano. En ese mismo año, el ELN lanza la campaña <i>Despierta Colombia, nos están robando el petróleo</i>, cuyo eje es hacer un llamado a la población a defender los recursos naturales⁵¹.</p> <p>De igual manera, la bandera en contra de la explotación petrolera se fue convirtiendo en su más poderosa arma en la confrontación⁵². En la <i>Reunión Nacional de Héroe y Mártires de Anorí</i>, el ELN decidió doblar las estructuras existentes con el fin de ampliar su presencia hacia las zonas de elevada riqueza minera y de explotación petrolera⁵³. Entre el I y II Congreso de la organización guerrilla, que tuvieron lugar en 1986 y 1989, respectivamente, “el ELN definirá una estrategia de guerra fundamentada en el ataque a los pilares de la economía nacional, tomando como objetivo militar la industria petrolera, la eléctrica y de transporte”⁵⁴.</p>
--------	--	--

⁴⁶ Según el portal de noticias Verdad Abierta, entre 1982 y 1986, el ELN tuvo un incremento de su pie de fuerza del 900%, registrando para ese último año 1.000 hombres en sus filas. Y entre 1987 y 1990, la agrupación guerrillera pasó de tener 1.200 hombres a tener 2.300 (ver más en: <http://www.verdadabierta.com/la-historia-de-las-auc/244-la-historia/auc/77-conflicto-armado-1981-1989>).

⁴⁷ Medina Gallego, Carlos, Op. Cit.

⁴⁸ Duque, Diana. *Una guerra irregular entre dos ideologías*. Intermedio editores. Bogotá, 1991.

⁴⁹ Revista Semana. “El Dilema del ELN”. 11 de mayo de 1998. <http://www.semana.com/imprimir/35831>; El Tiempo. “Mannesmann pagó US\$2 millones”. Noviembre de 1996. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-599309>

⁵⁰ Galindo, Pedro Elías. *Petróleo y paz: aportes a una metodología para la negociación temática*. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá, 2002.

⁵¹ Galindo, Pedro Elías, Op. Cit.

⁵² Echandía, Camilo (2013). Auge y declive del Ejército de Liberación Nacional (ELN): Análisis de la evolución militar y territorial de cara a la negociación. Informes FIP No. 21. Fundación Ideas para la Paz (FIP). Noviembre de 2013. Disponible en <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/529debc8a48fa.pdf>

⁵³ Echandía, Camilo (2013), Op. Cit.

⁵⁴ Aguilera, Mario. “ELN: entre las armas y la política”. En *Nuestra Guerra sin Nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia*. IEPRI/Editorial Norma: Bogotá, 2006. Pp. 222.

<p>1990- década de 2000</p>	<p>El crecimiento del sector continuó en los noventa con el descubrimiento, en 1991, del pozo Cusiana⁵⁵. En términos de producción, para esa década hay un incremento del 138%, al producirse un total de 562,21 Mdpd en promedio por año, frente a los 236,23 de la década de los ochenta⁵⁶.</p> <p>En la primera década de dos mil, aunque la producción de crudo permaneció casi estable frente a la década anterior⁵⁷, esta actividad recibió importantes estímulos de parte del poder central. Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) se dieron cambios institucionales⁵⁸ que buscaban que Colombia se convirtiera en un país más atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros⁵⁹, y así incrementar la exploración y la explotación de hidrocarburos⁶⁰.</p>	<p>Para esta década, el tema de los hidrocarburos no perdió relevancia en el discurso del ELN y a los puntos de la propuesta ya presentada sobre el tema petrolero, se le agrega la crítica del desvío de regalías hacia actividades del Estado ajenas a un propósito de beneficio de los pobladores de las regiones productoras, y se plantea la necesidad de crear una nueva legislación petrolera que favoreciera el desarrollo industrial y regional⁶¹.</p> <p>Nicolás Rodríguez alias “Gabino”, comandante del ELN y miembro del Comando Central (COCE), planteó lo siguiente: <i>Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de atentados terroristas, sino de sabotajes a la infraestructura a través de la cual se entregan los recursos nacionales a las empresas multinacionales. En segundo lugar, nosotros no nos hemos negado a las inversiones de capitales extranjeros, el problema que hemos señalado es cómo se hacen los contratos de inversión extranjera en la explotación de los recursos, que no producen desarrollo tecnológico, no defienden la propiedad de la nación sobre los mismos, ni favorecen el desarrollo de una planeación estratégica en el uso de dichos recursos</i>⁶².</p>
<p>2010-2014</p>	<p>La industria petrolera sigue siendo protagonista para el gobierno central, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que una de las banderas del presidente Juan Manuel Santos durante su primer periodo (2010-2014), estuvo asociada justamente a esta actividad, bajo el slogan de “la locomotora minera”. En línea con esto, la producción petrolera tuvo un importante incremento al pasar a registrar 911,82 Mdpd en promedio entre los años 2010 y 2013⁶³. Además, en ese periodo el promedio de las</p>	<p>En este periodo, el sector de hidrocarburos sigue teniendo gran relevancia para la agenda del ELN. Por ejemplo, entre 2010 y 2013, la mayor actividad militar del ELN se concentró en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Nariño, todos con una fuerte influencia de la industria petrolera⁶⁷. Además, la guerrilla mantiene su posición crítica frente a la explotación petrolera, desde una ideología que no abandona su tinte antiimperialista y nacionalista. Su discurso argumenta que la actividad petrolera beneficia principalmente a las multinacionales, y se insta por un cambio de modelo político y</p>

⁵⁵ El yacimiento de Cusiana está ubicado en el municipio de Tauramena en Casanare, y hasta el momento es más grande hallado en Colombia. Éste fue descubierto por una empresa estadounidense llamada Triton Energy Corp., adquirida por la multinacional británica British Petroleum poco antes del descubrimiento del yacimiento (ver más en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/MAM-385990>)

⁵⁶ El porcentaje de las ganancias de las exportaciones de hidrocarburos y derivados frente al total de exportaciones del país, en los 90 se mantuvo similar al porcentaje de los últimos años de los ochenta, con un promedio por año del 23%.

⁵⁷ En cuanto al porcentaje de las ganancias obtenidas de las exportaciones de hidrocarburos y derivados frente al total de exportaciones en el país, el promedio por año en esta década fue del 28%.

⁵⁸ Entre los cambios institucionales que se dieron durante el gobierno de Álvaro Uribe, se encuentra: (i) la Promulgación del Decreto Ley 1760 de 2003 con el que se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la que se le asignó la tarea de administrar y regular los recursos provenientes de la explotación de los hidrocarburos petroleros de la nación, además de la responsabilidad de asignar las áreas para exploración y explotación y del recaudo de regalías y compensaciones monetarias de propiedad del Estado por la explotación de hidrocarburos; (ii) El contrato de Concesión que estipula que ya no es necesario asociarse con Ecopetrol para la explotación, convirtiendo a Ecopetrol en una empresa más del mercado y en una compañía de economía mixta por la participación privada del 10% de sus activos; (iii) la eliminación del impuesto de remesas y generación de exenciones tributarias para importar equipos y deducir del impuesto de renta las regalías que se debían pagar por concepto de la explotación de los recursos naturales; y (iv) la introducción de la cláusula de “explotación hasta el agotamiento” en la ampliación de contratos de asociación para estimular la extracción secundaria (ver más en: Unidad de Planeación Minero Energética –UPME. 2013. Op. Cit.)

⁵⁹ Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo -ACIPET- (S.f.) Historia del petróleo en Colombia. Disponible en http://www.alip.org/docs/Historias/breve_historia_petrolera_colombia.pdf.pdf

⁶⁰ Roa, Lilia Tatiana (2012). *La ampliación de la frontera petrolera sobre los territorios campesinos en Colombia: conflictos y resistencias*. Universidad de Andina Simón Bolívar. Quito, Ecuador.

⁶¹ Las preocupaciones del ELN frente al petróleo fueron presentadas en un encuentro realizado en Costa Rica en el marco de las negociaciones de paz de Caracas en 1991, al que asistieron la Coordinadora Guerrillera, académicos, industriales, organizaciones de Derechos Humanos, exconstituyentes, sindicatos, ejecutivos de empresas energéticas y periodistas (ver más en: Galindo, Pedro Elías. *Petróleo y Paz*).

⁶² Medina Gallego, Carlos, Op. Cit.

⁶³ En el año 2013, Colombia produjo por primera vez en su historia un total de 1 millón de barriles diarios.

	<p>ganancias de las exportaciones por hidrocarburos y derivados frente al total de exportaciones en el país tuvo un incremento del 28% al 50%.</p> <p>Frente a la distribución de las regalías, el Gobierno de Santos realizó en 2012 una reforma constitucional, creando el Sistema Nacional de Regalías (SGR), para blindar dichos recursos de la corrupción regional, disminuir el déficit fiscal y redistribuir dichos recursos por toda la geografía nacional⁶⁴ ⁶⁵. Bajo este esquema, los hidrocarburos aportaron en 2013 más de \$4,7 billones en regalías, determinando una parte de los ingresos de la Nación y de las entidades territoriales⁶⁶.</p>	<p>económico. En una entrevista realizada en 2014 al comandante Pablo Beltrán, miembro del COCE, este acusa a las multinacionales de “explotar” los recursos naturales, sin tener consideración por la naturaleza ni por las comunidades que habitan el territorio. Beltrán asegura que, en este sentido, los atentados a la infraestructura petrolera ayudan a frenar el “saqueo” de petróleo en el país⁶⁸.</p>
--	---	---

3. EL ELN Y LOS ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA EN ARAUCA

En las primeras dos secciones se identificaron las motivaciones que llevan a la realización de ataques a la infraestructura petrolera y se mostró cómo se ha articulado la historia del sector de hidrocarburos a la lucha del ELN, respectivamente. En esta tercera sección se analizará la relación entre el plan estratégico del ELN y los atentados a la infraestructura petrolera tomando como referencia el caso de Arauca. Para ello se desarrollará, en primer lugar, la historia del ELN en Arauca y la manera como el grupo armado va articulando al sector petrolero, la clase política y las instituciones locales en su agenda. En segundo lugar, las dinámicas actuales del accionar del ELN en Arauca y su relación con otros actores legales e ilegales; en tercer lugar, la relación entre el Estado y la industria petrolera con la población en el departamento; en cuarto lugar, las características y tipos de motivaciones de los ataques a la infraestructura petrolera por parte del ELN; y finalmente, los tipos de impactos tanto para la sociedad y la naturaleza, como para la industria de hidrocarburos que ha generado los derrames de crudo en el departamento.

3.1 La historia del ELN en Arauca y el sector petrolero

En la medida que el ELN ha perdido poder sociopolítico e injerencia en las instituciones en los últimos años, y por ende, el acceso a los recursos que obtenía anteriormente de las regalías petroleras, ha incrementado la presión sobre el personal de las empresas petroleras para la obtención de recursos.

⁶⁷ Según datos de la Base de Datos del Conflicto FIP, en esos cuatro años el ELN registró un total de 85 acciones en Arauca, 40 en Norte de Santander y 39 en Nariño, concentrando entre los tres, el 74% del total del accionar de la agrupación guerrillera de ese periodo, que sumó 221 acciones.

⁶⁴ Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ. *Petróleo*. Bogotá, Abril de 2013.

http://ediciones.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/06/Petroleo-Generalidades_de_la_industria_petrolera_en_Colombia-Revista_Indepaz_2013.pdf

⁶⁵ Las regalías son el pago que realizan las compañías que explotan recursos no renovables al Estado colombiano como retribución por permitir la explotación de un recurso que es de propiedad de la nación. Estas son diferentes de los impuestos y se cobran por la producción basada en recursos no renovables como los mineros y petroleros que se extinguen en el transcurso del tiempo.

⁶⁶ Los excedentes de Ecopetrol fueron utilizados para controlar y cubrir el déficit de la nación (ver más en: Contraloría General de la República. *Situación de las finanzas del Estado colombiano 2013*. Bogotá, julio de 2014).

⁶⁸ “Entrevista a los Miembros del Comando Central del ELN”. *Revista Colombia Rebelde. Ejército de Liberación Nacional*. Edición No. 8/Octubre – Diciembre de 2014. http://www.ELN-voces.com/descargas/colombia/colreb_esp.pdf

La historia del establecimiento del ELN en Arauca está precedida por los siguientes hechos. En los años sesenta llegaron a la región del Sarare colonos campesinos impulsados por programas de colonización del INCORA y la Caja Agraria⁶⁹. Algunos de estos pobladores se adhirieron en 1969 a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), desde donde promovieron los primeros paros cívicos de la región, motivados por el poco acompañamiento que les había brindado el gobierno en el marco de los programas de colonización, dejando a la población sometida a muy malas condiciones de vida⁷⁰. La persistencia de esta situación y las constantes persecuciones de las que empezaron a ser víctimas por parte de la fuerza pública, hicieron que a finales de los setenta contactaran a integrantes del ELN que estaban en Barrancabermeja y Bucaramanga y así se empezaron a involucrar con la organización guerrillera⁷¹. Este núcleo funda el frente Domingo Laín, que se ubica inicialmente en Saravena, y posteriormente se extiende hacia Arauquita y la zona norte de Tame, como lo contó la población de la zona durante el trabajo de campo.

El Domingo Laín creció rápidamente en los primeros años de los ochenta porque contaba con el apoyo del campesinado, redes familiares y de conocidos entre las comunidades⁷². Organizados en pequeñas comisiones, el frente comenzó a secuestrar ganaderos y a realizar incursiones a pueblos a ambos lados de la frontera, que en ese momento contaba con muy poca vigilancia⁷³. Sin embargo, en 1983 con el descubrimiento del yacimiento de petróleo Caño Limón por parte de la empresa estadounidense *Occidental Petroleum* y la posterior construcción del oleoducto Caño Limón–Coveñas, que inició operaciones en 1985, el ELN se fortaleció política y militarmente en el departamento⁷⁴.

De esta forma, el ELN adopta una estrategia de captación de rentas ilegales por medio de extorsiones a las petroleras para financiar el sostenimiento de sus proyectos armados en la región, lo que fue fundamental en la consolidación del *Frente de Guerra Nororiental*, siendo el Domingo Laín su principal eje⁷⁵. Dentro de esta estrategia, el caso más conocido y mediante el que el ELN recibió la mayor cantidad de recursos fue el de la empresa alemana Mannesmann, encargada junto con la italiana Sicim de construir el oleoducto Caño Limón–Coveñas. Entre 1983 y 1985, el ELN presionó a la Mannesmann bajo la amenaza de atentar contra el proyecto y su personal para forzarla a pagar millonarias extorsiones⁷⁶. Aunque nunca se han conocido con certeza los montos que el ELN recibió de la Manessmann, los cálculos indican que por la liberación de cuatro de sus

⁶⁹ Pastoral Social. *Arauca: conflicto armado y problemáticas humanitarias año 2010*. Observación y Solidaridad con Arauca (OBSAR). Arauca, 2010.

⁷⁰ La región contaba con una muy mala oferta de infraestructura, servicios básicos como salud y educación, y ausencia casi de vías de comunicación (ver: Pastoral Social. *Arauca: conflicto armado y problemáticas humanitarias año 2010*).

⁷¹ Corporación Nuevo Arco Iris. “Fronteras calientes: Arauca y el frente Domingo Laín (primera parte)”. Mayo 25 de 2012. <http://www.arcoiris.com.co/2012/05/fronteras-calientes-arauca-y-el-frente-domingo-lain-primera-parte/2/>

⁷² Corporación Nuevo Arco Iris. *El Domingo Laín tuvo su propia “locomotora” del petróleo y comete su peor crimen (2da parte)*. Mayo 26 de 2012. <http://www.arcoiris.com.co/2012/05/el-domingo-lain-tuvo-su-propia-locomotora-del-petroleo-y-comete-su-peor-crimen/>

⁷³ Peñate, Andrés. *El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado*. Paz pública/Universidad de los Andes. Marzo de 1998.

⁷⁴ Dunning, Thad and Wirspa, Leslie. “Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia and Beyond: A Linkages Approach”. *Geopolitics*, Vol. 9, No. 1(Spring 2004) pp. 81-108.

⁷⁵ Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. *Panorama actual de Arauca y Casanare*. Bogotá, Junio 2002.

⁷⁶ Según lo plantea Andrés Peñate, a los tres meses de iniciar actividades en Arauca, la compañía ya había sufrido cuatro ataques contra sus frentes de trabajo, cuatro de sus empleados habían sido asesinados, otros cuatros se encontraban secuestrados y los trabajos se encontraban prácticamente paralizados (ver más en: Peñate, Andrés).

ingenieros, la empresa habría pagado hasta 8 millones de dólares⁷⁷, de los cuales una parte se recibió en efectivo y el resto debían ser invertidos en obras sociales⁷⁸.

Paralelamente, el ELN fue construyendo su identidad revolucionaria en el territorio, basada en la denuncia por las políticas de extracción petrolera y la soberanía nacional. Además apeló a las raíces históricas que lo ligan al sindicalismo petrolero y sus luchas nacionalistas, con el fin de articular la lucha guerrillera y la resistencia civil⁷⁹. De esta manera, esta guerrilla buscaba darle una orientación y coordinación regional a sus estrategias políticas y militares, por lo que enfatizó en el concepto de *área estratégica*, que se define “en torno a ejes económicos y al movimiento capaz de dinamizar el conflicto social en una región”⁸⁰. Además, a esta postura de oposición a la explotación petrolera se fue integrando una propuesta de modelo de desarrollo, que proponía que la renta que generan los hidrocarburos se debía invertir en bienestar para la población⁸¹.

Por esta línea, en los años ochenta, el ELN comenzó a atentar contra la infraestructura petrolera con dos propósitos principales: demostrar su efectividad para presionar a las empresas al pago de extorsiones y mostrar que los atentados podían ser una forma para obligar a modificar la política petrolera nacional⁸². Así, con los ataques a la infraestructura petrolera buscaban difundir la propuesta de que la extracción petrolera debía contribuir al desarrollo local y regional⁸³. En ese contexto, el ELN apoyó movilizaciones campesinas que demandaban la atención sobre un conjunto de carencias y el incumplimiento del gobierno nacional⁸⁴. De ahí que la influencia que el grupo guerrillero buscó tener en estas acciones colectivas se haya expresado en la relevancia que tomó la problemática petrolera en las reivindicaciones de los movimientos sociales, ubicándose como una de las principales demandas ante el Estado⁸⁵.

Pero la estrategia del ELN en Arauca va mucho más allá de la obtención de recursos por medio de secuestros y extorsiones a la industria petrolera. De hecho, aunque continuó buscando acceder a las ganancias del petróleo, también lo hizo al usar la administración pública mediante el desvío de recursos públicos y de incidir en la clase política local. Según población de la región, la relación que se estableció entre el ELN y los políticos fue de beneficio mutuo, ya que la guerrilla identificó las ventajas de comprender las realidades de la arena política local y, a su vez, los políticos aprovecharon el hecho de contar con un brazo armado y coercitivo para permanecer en el poder. El ELN aprovechó la primera elección popular de alcaldes en 1988, para promover personas afines a la organización, por ejemplo, mediante el respaldo a paros cívicos y amenazas de muerte a funcionarios del INCORA⁸⁶.

⁷⁷ En el texto “The Colombian Conflict: Political and Economic Dimensions”, Alexandra Guáqueta, plantea que si bien el monto pagado por la Mannesmann al ELN fue bastante alto, era mucho menor que los US \$300 que debía pagar la empresa a la Occidental Petroleum en caso de retrasarse en la construcción del oleoducto (ver más en: Guáqueta, Alexandra. “The Colombian Conflict: Political and Economic Dimensions” en K. Ballentine y J. Sherman ed., *Political Economy of Armed Conflict*. London: Lynne Rienner Publishers, 2003).

⁷⁸ Corporación Nuevo Arco Iris. *El Domingo Laín tuvo su propia “locomotora” del petróleo y comete su peor crimen (2da parte)*. 26 de mayo de 2012. <http://www.arcoiris.com.co/2012/05/el-domingo-lain-tuvo-su-propia-locomotora-del-petroleo-y-comete-su-peor-crimen/>

⁷⁹ Vargas, Alejo. *Guerra o solución negociada. ELN origen, evolución y procesos de paz*. Intermedio: Bogotá, 2006.

⁸⁰ Vargas, Alejo, Op. Cit., Pp. 247.

⁸¹ Galindo, Pedro Elías, Op. Cit.

⁸² Vargas, Alejo. *Guerra o solución negociada. ELN origen, evolución y procesos de paz*. Intermedio: Bogotá, 2006.

⁸³ Galindo, Pedro Elías, Op. Cit., Pp. 188.

⁸⁴ Vargas, Alejo, Op. Cit.

⁸⁵ Galindo, Pedro Elías, Op. Cit.

⁸⁶ Peñate, Andrés, 1998, op. Cit.

Como lo plantea Andrés Peñate, la protección y la amenaza a los políticos locales le permitió al Domingo Laín convertirse en un intermediario efectivo entre las necesidades de la población y los recursos públicos designados para satisfacerlas. Dicha intermediación, que contaba con los grandes recursos fiscales del departamento –en gran medida, gracias al descubrimiento de Caño Limón– le otorgó al Domingo Laín un “entronque” histórico con ciertos sectores de la población local⁸⁷. El mismo autor explica así intermediación: el ELN les exigía a los encargados de las obras civiles del oleoducto “enganchar” trabajadores y destinar ayudas comunitarias, con lo que les aseguraba no encontrar obstáculos de parte de los habitantes durante la realización de sus obras. Con esto, la población asumió que los miembros de la guerrilla eran el mejor medio para obtener beneficios de los proyectos, estando, así, dispuestos a seguir algunas de sus instrucciones⁸⁸.

Sumado a lo anterior y posterior a la construcción del oleoducto, el ELN obligó a los contratistas de obras públicas a pagarles un porcentaje para poder llevar a cabo sus trabajos sin obstáculos, reteniendo de esta manera parte de los recursos del petróleo que en teoría estaban destinados al departamento. La situación alcanzó tal magnitud que en enero de 2003, la Procuraduría General intervino la administración del pago de regalías en el departamento⁸⁹. Igualmente, múltiples políticos de la región han sido acusados de tener relación con las redes clientelistas del ELN, al desviar parte de las regalías del departamento al grupo armado. Entre estos se encuentran los exgobernadores Luis Alfredo Colmenares, (1991-1994), José Vicente Fernández (1995-1997); Gustavo Carmelo Castellanos (1998-2000); Federico Gallardo (2001); y el exalcalde de Arauca Jorge Cedeño (2000-2003)⁹⁰.

Es más, en octubre de 2003, mediante la puesta en marcha de la Operación Dignidad, fueron capturados además de los representantes ya mencionados, una serie de políticos, funcionarios públicos y contratistas que en total sumaron 32 personas⁹¹. Durante las investigaciones realizadas por la Fiscalía y el DAS en el marco de este operativo se encontró que de los 1.200 millones de dólares de regalías petroleras que Arauca recibió, aproximadamente unos 200 millones de dólares había sido destinados al ELN, y que el frente Domingo Laín ejercía un fuerte control sobre los otros 1.000 millones de dólares de inversión departamental⁹².

Cabe añadir que durante esta época, el ELN continuó llevando a cabo secuestros, como el que ocurrió el 16 de abril de 2001, cuando fueron secuestrados 107 empleados de la compañía

⁸⁷ Peñate, Andrés, 1998, op. Cit.

⁸⁸ Peñate, Andrés, 1998, op. Cit.

⁸⁹ Dunning, Thad and Wirspa, Leslie. Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia and Beyond: A Linkages Approach. *Geopolitics*, vol. 9, no. 1 (Spring 2004) pp. 81-108.

⁹⁰ Corporación Nuevo Arco Iris. “Arauca: el eterno retorno de la insurgencia (3ª parte)”. Mayo 27 de 2012/Misión de Observación Electoral. *Monografía Político Electoral. Departamento de Arauca 1997 a 2007*. Bogotá.

⁹¹ Algunas de las personas capturadas en octubre de 2003 durante la Operación Dignidad fueron: los candidatos a la alcaldía de Arauca William Reyes y Benjamín Socadagú; la contralora departamental Edna del Carmen Benítez; la Secretaria de Hacienda de Arauca, Luz Stella Dueñas; Carlos Alfonso Araújo, jefe de la División de la Secretaría de Agricultura; Luis Alberto Peraza, funcionario del Instituto Departamental; Heriberto Villamizar, director de Contabilidad y Presupuesto de la Gobernación; Ana Emma Mójica García, gerente encargada de la Empresa de Energía; Elianor Ávila Gómez, diputada de la asamblea; los concejales Pedro Jesús Orjuela Gómez y Mercedes Rincón Espinel; Ramón del Carmen Garcés, presidente de la Asamblea; y el contratista Miguel Ángel León Villamizar. (ver más en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1038617>; <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1018154>).

⁹² Revista Semana. “Gobierno tras las rejas”. 27 de octubre de 2003. <http://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-tras-rejas/61509-3>

Occidental Petroleum, a 16 kilómetros del municipio de Arauca⁹³. Unas horas después, 73 de los secuestrados fueron puestos en libertad y los restantes liberados tres días después. Los comandantes del ELN dijeron posteriormente que el secuestro buscaba alertar sobre la creciente presencia de paramilitares en el departamento y de los vínculos de estos con las Fuerzas Militares y el sector económico⁹⁴.

Si bien durante varios años el ELN fue el actor armado ilegal predominante en Arauca, a principios de la década del dos mil fue relegado por el creciente poder económico y militar de las FARC en la zona y por la inserción de los paramilitares y el Ejército Nacional, cuyo accionar en Arauca se enfocó justamente en proteger a la industria petrolera. Así, a partir de 1998, las FARC empezaron a disputar el territorio del ELN para apoderarse de la rentas del petróleo, ejercer presión sobre las administraciones locales, convertir la frontera con Venezuela en uno de sus puntos fuertes e iniciar su participación en el negocio de narcotráfico en esa zona⁹⁵. A esto se suma el apuntalamiento de los grupos paramilitares que buscaban demostrar, por un lado, su capacidad reactiva y expansiva en el marco de las negociaciones de paz de El Caguán y consolidar su proyecto en el norte del país al conectar las regiones de Arauca, Catatumbo, Nudo de Paramillo, Montes de María y Sierra Nevada de Santa Marta. Y por otro, disputar territorios de presencia guerrillera, apoderarse de las rentas de la coca, evitar o disputar la incursión de las FARC, minar la influencia histórica del ELN y neutralizar cualquier tipo de lucha y protesta social asociadas al sector de hidrocarburos. En cuanto a la fuerza pública, cabe mencionar el despliegue de la Operación Némesis entre 1999 y 2000 y la declaración de Arauca como Zona de Rehabilitación y Consolidación entre septiembre de 2002 y abril de 2003⁹⁶.

En este contexto, la capacidad militar del ELN a principios de la década de dos mil se vio fuertemente debilitada y hasta superada por la FARC, que se fortaleció en estos años por su participación en el cultivo de coca y el narcotráfico. Inclusive alcanzó a tener mayor participación que el ELN en los secuestros y en el número de atentados a la infraestructura petrolera. En el caso de los secuestros, según el Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia, entre 2003 y 2006, las FARC fueron responsables de 31 casos de secuestro, las autodefensas de 24 y el ELN de 13⁹⁷. Y en el de los atentados, según la Base de Datos del Conflicto de la FIP, entre 2002 y 2006, las FARC fue responsable de 32 ataques a la infraestructura petrolera, mientras que el ELN sumó 10.

⁹³ BBC Mundo. “Colombia: secuestro de petroleros”. 17 de abril de 2001.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1281000/1281173.stm

⁹⁴ Amnistía Internacional. *Colombia un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca*. Abril de 2004.

⁹⁵ Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. *Panorama actual de Arauca y Casanare*. Op. cit.

⁹⁶ Las Zonas de Rehabilitación y Consolidación fueron reglamentadas por medio del decreto 2002 de 2002, mediante el que se dio vía libre a la aplicación de una o más medidas excepcionales a través de las cuales el territorio podía ser administrado por parte de autoridades militares. Las zonas son descritas en el decreto como “el área geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más de las medidas excepcionales de que tratan los siguientes artículos, sin perjuicio de la aplicación de las demás medidas dictadas con base en la conmoción interior”. De igual manera, en el marco de la declaración se realizó la compra de helicópteros, servicios de formación e inteligencia y material para la XVIII Brigada, se creó la Brigada Móvil no. 5 (para proteger el oleoducto) y unidades fluviales y de Policía, financiadas por el gobierno estadounidense, y fueron enviados 70 miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses para formar a unidades de la XVIII Brigada (ver: Amnistía Internacional. *Colombia un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca*. Abril 2004).

⁹⁷ Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. *Diagnóstico departamental Arauca*. Bogotá, 2007.

Posterior a la desmovilización de los grupos paramilitares⁹⁸, las FARC y el ELN iniciaron una disputa por el control del territorio, específicamente de los pasos fronterizos a Venezuela y las zonas cercanas a los pozos petroleros⁹⁹, en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Arauquita. Los enfrentamientos se desarrollaron hasta septiembre de 2010, cuando ambos grupos guerrilleros establecieron un acuerdo de no agresión en el departamento¹⁰⁰.

3.2 El ELN hoy en Arauca: la recuperación violenta de un poder de tradición

Según los testimonios recogidos por la FIP en la región, tras la firma del acuerdo de no agresión con las FARC, el frente Domingo Laín del ELN ha retomado varias de las estrategias que caracterizaron a la agrupación en periodos anteriores, ubicándose nuevamente como el grupo predominante en Arauca¹⁰¹. Y aunque ha intentado reconstruir bases sociales e incidir en la política local, no ha tenido el éxito esperado, precisamente por el desprestigio en el que quedó después de los violentos años de disputa con las FARC¹⁰² y porque los araucanos “están cansados de la guerra”. En este sentido, la agrupación guerrillera tampoco ha podido acceder a los recursos provenientes de las regalías petroleras (como lo hizo en años anteriores), hecho que ha suplido con un incremento en la presión sobre el sector petrolero para la obtención de recursos por medio de extorsiones y secuestros. Como se verá más adelante, esto se refleja en un incremento en el número de ataques a la infraestructura petrolera.

Con el acuerdo de no agresión, ambos grupos guerrilleros también establecieron una estricta división de las zonas donde se ubicaría cada estructura armada¹⁰³, pero con el paso de los años estas divisiones se han vuelto más flexibles por lo que cohabitan de manera relativamente pacífica en algunas áreas del departamento. En la actualidad, el ELN tiene una importante presencia en sus zonas de influencia histórica, municipios fronterizos y por los que pasan los oleoductos¹⁰⁴, como Saravena y Arauquita (especialmente en la zona que va desde el corregimiento de Puerto Contreras en Saravena hasta Puerto Lleras en Arauquita), así como en Fortul y en ciertas zonas de Tame y Arauca capital, especialmente, sobre el paso fronterizo¹⁰⁵.

Frente al accionar del ELN, en términos generales realiza de manera recurrente ataques a la infraestructura petrolera (como se verá en la sección *Tendencias y motivaciones de los ataques a la infraestructura petrolera en Arauca y su relación con el ELN*), trabajo sociopolítico y controla gran parte de las actividades de extorsión y de los pasos fronterizos utilizados para el

⁹⁸ En Arauca operó el Bloque Vencedores de Arauca perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia, el cual se desmovilizó en diciembre de 2005, con 548 combatientes (ver más en: <http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/2258.pdf?view=1>).

⁹⁹ Misión de Observación Electoral. *Monografía Política Electoral. Departamento de Arauca 1997 a 2007*. Bogotá.

¹⁰⁰ Fundación Ideas para la Paz. *Dinámicas del Conflicto Armado en Arauca y su Impacto Humanitario*. Junio de 2014.

¹⁰¹ Según lo narra población de la región, la coyuntura de reorganización del ELN se vio favorecida por la retoma de la comandancia de Gustavo Giraldo alias “Pablito” del frente Domingo Laín, quien escapó de las autoridades colombianas en octubre de 2009 y lidera la estructura desde campamentos establecidos en Venezuela cerca de la frontera.

¹⁰² Aunque se desconocen las cifras exactas de las muertes ocasionadas durante la disputa entre las FARC y el ELN, se ha hablado de entre 800 y 2.000 muertos.

¹⁰³ Esta división del territorio se hizo en un primer momento a partir de las zonas de presencia histórica de ambas guerrillas, ubicándose el ELN en la zona noroccidental del departamento (Saravena, Fortul, y cierta área de Arauquita y Tame; y las FARC en la zona suroriental (Tame, Cravo Norte, Puerto Rondón y cierta área de Arauquita).

¹⁰⁴ El oleoducto Caño Limón – Coveñas pasa por los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca, y el oleoducto Bicentenario pasa por los municipios de Saravena, Fortul, Tame y en Arauca se conecta con Caño Limón – Coveñas.

¹⁰⁵ La presencia de las FARC es mayor hacia la zona oriental del departamento, aunque comparte territorio con el ELN en ciertas zonas de los municipios de Arauquita, Fortul y Tame. Registra algo de presencia en Cravo Norte y Puerto Rondón.

contrabando. Adicionalmente, personas de la región dan cuenta de que si bien las FARC y el ELN realizan algunas acciones en conjunto, las FARC se han concentrado en los ataques a la fuerza pública, controlan los cultivos de coca y extorsiona, aunque en menor medida que el ELN¹⁰⁶.

Con respecto a las fuentes de financiamiento del ELN en el departamento, se estableció que la principal fuente es cobro por extorsiones, cuyo pago se asegura mediante la amenaza o la comisión de ataques a la infraestructura petrolera, que le generan importantes pérdidas al sector. Frente a las extorsiones, la forma de operar es la siguiente: los guerrilleros ubican retenes ilegales en las vías, retienen las camionetas de los contratistas –usualmente de color blanco– y sólo las devuelven hasta que paguen una determinada suma de dinero. Aunque las extorsiones no se limitan a los contratistas de las petroleras, pues también afectan a comerciantes y transportadores, sí son las que más ingresos le generan al ELN¹⁰⁷.

En febrero de 2015, los medios de comunicación difundieron los primeros resultados de una investigación de la Fiscalía General de la Nación, que demostró que la multinacional italo-argentina Sicim, encargada de la construcción del oleoducto Bicentenario, realizó varios pagos a estructuras de las FARC y el ELN entre 2012 y 2014. Había uno de seis millones de dólares, tres para el ELN y tres para las FARC, y uno de 600 millones de pesos para un comandante del ELN¹⁰⁸.

Adicionalmente, la investigación indicó que altos ejecutivos de la empresa, entre los que se mencionan los nombres de Francisco Elizondo y Roberto Jorge Rigoni, sostuvieron comunicación y realizaron varios encuentros con Salvador Gaitán alias “Gaitán”, uno de los jefes de finanzas del frente Domingo Laín, y que mantuvieron conversaciones “fluidas y familiares” con Amaly Fernanda Meza, alias “la Gordá”, que se desempeñaba como líder social pero que en realidad era miembro activo del ELN en el departamento. Expedientes del caso documentan que alias “la Gordá” ejecutó actos violentos para sacar a otras empresas del camino, siguiendo instrucciones de ejecutivos de Sicim¹⁰⁹. Este hecho, de resultar verdadero en instancias judiciales, demostraría que las trayectorias de las interacciones entre grupos armados y sectores o individuos del sector de hidrocarburos también han sido de colaboración y beneficio. De ser extorsionados, como se ha visto durante décadas, algunas esferas del sector de hidrocarburos habrían pasado a ver en la presencia de actores armados una posibilidad de negocio y renta, tal y como sucedió en otras partes del país con los grupos paramilitares, vistos como empresarios criminales o administradores de la coerción que proveían de un servicio para obtener beneficios puntuales.

De igual manera, la guerrilla ha seguido realizando secuestros de contratistas de las petroleras, según lo relata población entrevistada en la zona, quienes agregan que estos son las principales

¹⁰⁶ En la actualidad los cultivos de coca se encuentran concentrados en el municipio de Arauquita y las hectáreas sembradas en el departamento han disminuido de manera significativa (incluir datos del SIMCI).

¹⁰⁷ Esta información coincide con lo publicado en una investigación realizada por la Corporación Nuevo Arco Iris, en la que se plantea que para 2011 la gran mayoría de subcontratistas petroleros estaban pagando extorsiones a los grupos guerrilleros (ver más en: Ávila, Ariel Fernando. *La frontera caliente entre Colombia y Venezuela*. Corporación Nuevo Arco Iris, Op. cit.). Algo similar expresó un experto en conflicto y paz en 2014, quien estableció que el cobro de extorsiones y las negociaciones entre empresarios y guerrilleros han seguido constituyendo el principal fuente de financiación del Domingo Laín, lo que le ha dado el “músculo” suficiente para incidir en el ELN, y para contar con mucha influencia en la toma de decisiones ante un eventual proceso de paz con el gobierno (ver más en: Verdad Abierta. “Arauca: prueba ácida para el proceso de paz”. 15 de diciembre de 2014).

¹⁰⁸ Revista Semana. “La petrolera que negociaba con el ELN”. 31 de enero de 2015.

<http://www.semana.com/nacion/articulo/la-petrolera-que-negociaba-con-el-ELN/416475-3>

¹⁰⁹ Revista Semana. “La petrolera que negociaba con el ELN”, Op. Cit.

víctimas de secuestros del departamento. Los propósitos detrás de ese tipo de acciones serían obtener rentas del pago de las liberaciones y afectar a las empresas extractivas. Entre los secuestros ocurridos recientemente está el de tres trabajadores de una empresa subcontratista del Oleoducto Bicentenario que fueron raptados en zona urbana de Saravena en 2013. Según la prensa, el lunes anterior a los hechos, guerrilleros del ELN había abordado un bus de esta empresa, indicándoles que todo trabajador y transporte de los campos petroleros “sería declarado objetivo militar”¹¹⁰. Un hecho similar ocurrió en febrero de 2014, cuando un grupo guerrillero secuestró a dos subcontratistas del Oleoducto Bicentenario en un retén ilegal instalado en la vía entre Tame y Fortul. Los empleados de la petrolera fueron liberados horas después¹¹¹. Otros casos ocurridos entre 2011 y 2013 fueron los de dos gestoras sociales de Bicentenario, una supervisora ambiental del mismo proyecto y el de un contratista de OXY y Ecopetrol¹¹².

En las visitas hechas a la zona se preguntó por el discurso bajo el cual el ELN cobija los ataques contra la infraestructura petrolera, las extorsiones y los secuestros, y se encontró que las prácticas discursivas mantienen los fundamentos de las de hace dos y tres décadas¹¹³. Los testimonios de pobladores de la región describen que la guerrilla entrega panfletos en los que plantea su oposición frente a la explotación petrolera. En estos panfletos critican que las empresas multinacionales se queden con gran parte de las ganancias, declaran “objetivo militar” a las personas que trabajan para las empresas asociadas al sector petrolero, llaman la atención sobre el poco bienestar que esta actividad le genera a la población araucana y sobre las consecuencias medioambientales de la misma. En los testimonios se agrega que los panfletos son iguales que los de periodos anteriores.

Por otra parte, la situación sociopolítica del ELN se caracteriza por haber perdido gran parte de su base social en el departamento debido a la violencia indiscriminada y el comportamiento criminal que caracterizó el accionar de los grupos armados durante los años de disputa entre las guerrillas. También cuenta que por el debilitamiento que sufrió en los primeros años de la década del dos mil, descuidó la capacidad de influencia que llegó a tener en las instituciones departamentales. Sin embargo, después de la firma del acuerdo de no agresión con las FARC en 2010, el ELN ha retomado su trabajo sociopolítico buscando reconstruir sus bases de apoyo, así como su incidencia social por medio de la defensa de algunas reivindicaciones sociales. Esto lo ha llevado a articular su discurso al de las organizaciones sociales, sobre todo en Saravena, Arauquita y Fortul. No

¹¹⁰ El Tiempo. “Secuestran a tres trabajadores de oleoducto en Arauca”. 10 de septiembre de 2013. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13056444>

¹¹¹ El Tiempo. “Liberan contratistas de Oleoducto Bicentenario secuestrados en Arauca”. 17 de febrero de 2014. http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13514555.html#panel-3

¹¹² Ver más en: <http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=6559>; <http://www.elespectador.com/noticias/paz/revelan-pruebas-de-vida-de-dos-mujeres-secuestradas-ara-articulo-364514>; <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13315415>.

¹¹³ Las primeras posiciones del ELN frente a la explotación petrolera fueron las presentadas por Camilo Torres en la plataforma del Frente Unido en las cuales se planteaba lo siguiente: *La propiedad del subsuelo será del Estado y la explotación del petróleo se hará por su cuenta para fines de servir la economía nacional. No se darán concesiones petroleras a compañías extranjeras y sino con las condiciones siguientes: a) que la participación del Estado no sea inferior al 70%; b) que la refinanciación, distribución y producción de los combustibles sean servicios públicos bajo su control; c) devolución al Estado de las empresas, equipos e instalaciones gratuitamente, a más tardar a los 25 años; d) los salarios de obreros y empleados colombianos serán por lo menos iguales a los de los extranjeros de la misma categoría.* A esto se le agrega en los noventa, la preocupación por el desvío de regalías hacia actividades del Estado ajenas a un propósito de beneficio de los pobladores de las regiones productoras, a raíz de lo cual se plantea la necesidad de crear una nueva legislación petrolera que buscara favorecer el desarrollo industrial y regional (ver más en: Arenas, Jaime. *ELN la guerrilla por dentro*. Icono Editorial: Bogotá, 2009; Galindo, Pedro Elías. *Petróleo y Paz*).

obstante, lo que ha quedado claro con las visitas a la zona —e independientemente de si el ELN ha logrado o no legitimidad en algunos sectores sociales— es que esta guerrillera ha logrado mantener el grado de sintonía con la población respecto a su oposición a las políticas de extracción petrolera y los impactos que se derivan de esta.

Otra de las medidas a las que recurrió el ELN para la recuperación de su base social, fue establecer normas de comportamiento y disciplina entre los combatientes y apelar a recuperar el espíritu revolucionario entre las tropas, con el objetivo de cambiar la percepción de la población. Un ejemplo es la elaboración de un Manual de Convivencia¹¹⁴, compartido entre el frente de Guerra Oriental del ELN y el Bloque Jorge Briceño de las FARC, que establece normas que deben ser cumplidas por los integrantes de ambos bandos.

En los años posteriores a la firma del acuerdo de no agresión, el ELN también ha buscado volver a ejercer control político sobre las instituciones y los gobiernos locales, sobre todo en los municipios donde cuenta con una importante presencia como Saravena, Arauquita y Fortul. Pero, según lo relatado en el trabajo de campo, debido a la pérdida de apoyo e influencia ideológica, el ELN se ha visto en la necesidad de apelar a medidas violentas para lograr este propósito. Por ejemplo, para ser candidato en los municipios mencionados hay que tener el aval de la guerrilla y sentarse a negociar con el comandante de la zona para llegar a acuerdos. De esta manera, el ELN ha buscado mantener fichas políticas que pueda usar y, así, tener acceso a las finanzas públicas.

No obstante, este tipo de influencia es menor que en el pasado, por lo que los candidatos avalados por la agrupación están perdiendo las elecciones. Es más, algunos de los entrevistados comentan que la población está cansada de la violencia, por lo que se “derechizó” en los municipios en los que el ELN tuvo apoyo. Es así que para intentar algún tipo de hegemonía en el territorio, el grupo guerrillero ha recurrido a la violencia por medio de homicidios selectivos de candidatos que no están de su lado¹¹⁵ y a retaliaciones en contra de la población por no votar por sus candidatos. Así ocurrió en las últimas elecciones en Saravena, donde ganó John Fredy Peña por el Partido de la U, candidato que según la población no tenía el aval del ELN, por lo que ha recibido múltiples amenazas. “El ELN no lo ha dejado gobernar”, expresa uno de los entrevistados en Arauca.

En este proceso de búsqueda por el control político, el ELN ha hecho una “rendición de cuentas” entre los políticos que en algún momento estuvieron de su lado, pero que durante el periodo de disputa participaron en la contienda con fuerzas políticas de oposición, o aquellos que ya no están de su lado. Esta rendición consiste en asesinar a los políticos sobre los que la guerrilla ya no tiene influencia¹¹⁶. Por último, las represalias contra la población se dieron, principalmente, después de

¹¹⁴ El Manual, titulado Normas Unitarias de Comportamiento y Convivencia del Frente de Guerra Oriental Comandante Jefe Manuel Vásquez Castaño del ELN y del Bloque Comandante Jorge Briceño de las FARC EP, está compuesto por los siguientes seis capítulos: (I) Introducción; (II) Enfoque Político Unitario; (III) Sustentación; (IV) Definiciones; (V) Normas éticas para la Unidad; (VI) Normas de Convivencia. El documento fue distribuido el año pasado en varias zonas del departamento de Arauca, principalmente en áreas rurales.

¹¹⁵ Los homicidios a los que se hace referencia en el comentario no. 34 también están asociados a esta situación.

¹¹⁶ Según los testimonios, algunos casos de esto son los siguientes homicidios: la muerte de Juan Manuel Mogollón, ex alcalde de Saravena (1992-1994), ex personero (1998) del mismo municipio, y ex candidato a la gobernación de Arauca, ocurrido el 18 de septiembre de 2012 (ver más en: <http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=7408>); la muerte de Wilson Madero, quien había participado en las elecciones de 2011 como candidato a la alcaldía de Fortul, y al momento de su muerte en septiembre de 2012 se encontraba trabajando para el oleoducto Bicentenario (ver más en: <http://araucastereo.com/noticia.php?id=2314>); el asesinato del concejal por el Partido Verde, Donald Sánchez Lizarazo en noviembre de 2013 (<http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/asesinan-en-saravena-al-concejal-donald>).

la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ya que en municipios de importante presencia guerrillera como Saravena y Tame, el candidato por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga obtuvo más votos que Juan Manuel Santos. Posterior a estos resultados, la población entrevistada narró que la guerrilla ejerció gran presión hacia la población, intentando comprar votos, para que en la segunda vuelta la balanza quedara a favor de la coalición de gobierno. Y a pesar de que en la segunda vuelta ganó Santos, en los meses siguientes incrementaron los índices de violencia hacia sectores poblacionales concretos, acusados de ser informantes de la fuerza pública¹¹⁷.

3.3 ¿Por qué el discurso en contra de la industria petrolera se mantiene vigente?

En esta sección se aborda la relación entre el Estado y la industria petrolera con la población araucana, a partir de una breve reconstrucción de la historia del movimiento social en el departamento. El argumento principal es que el Estado y la industria petrolera tienen una deuda histórica con la población de Arauca asociada a la falta de bienestar general. Por lo cual, se considera esencial que el reconocimiento de esa deuda y sus elementos constitutivos sean tenidos en cuenta para cualquier ejercicio de reconciliación y de construcción de paz en un eventual período de postconflicto.

El origen del movimiento social en Arauca se remonta al periodo entre las décadas de los 40 y 70 con los procesos de colonización dirigida por el Estado en el marco de una política nacional de ampliación de la frontera agrícola¹¹⁸. En Arauca, este proceso no incluyó estrategias de integración de la población ni la creación de condiciones óptimas para su pleno desarrollo socio económico. Este proceso fallido tuvo al menos dos efectos que explican el surgimiento y desarrollo del movimiento social. Primero fueron las tensiones generadas por la ocupación productiva de la tierra entre colonos campesinos e indígenas¹¹⁹, quienes ante la ausencia de reglas de juego oficiales se vieron avocados a organizarse de manera autónoma en cooperativas de productores, juntas de acción comunal, asociaciones agrícolas y cabildos indígenas¹²⁰ con el fin de catalizar sus diferencias y protestar en contra de un modelo considerado débil¹²¹. Saravena fue el centro de llegada de los colonos, quienes fueron conformando organizaciones de base¹²².

sanchez-lizararo/20131121/nota/2021727.aspx); y la muerte de Pedro Antonio Bohórquez, secretario de Desarrollo Social de Saravena en agosto de 2014 (ver más en: <http://www.rcnradio.com/noticias/ofrecen-50-millones-por-autores-del-homicidio-de-funcionario-de-alcaldia-de-saravena-155042>). En los últimos dos años se registraron otros hechos de violencia política contra antiguos políticos de Saravena pero sobre los que no se tiene claridad de los responsables, como el asesinato en junio de 2013 de un ex concejal de Saravena llamado Javier Durán, quien se desempeñó como representante en el periodo de 2004 a 2007 por el Polo Democrático (<http://araucastereo.com/noticia.php?id=3379>) y un atentado en Cúcuta contra Antonio José Ortega, exalcalde de Saravena por el Partido Liberal en ese mismo periodo (http://www.laopinion.com.co/demo/index.php?option=com_content&task=view&id=448753&Itemid=33#.VP31P_mG).

¹¹⁷ Habitantes de la región relataron que el ELN fue particularmente violento en Saravena en el segundo semestre del año 2014, realizando acciones que nombran como de “limpieza social” mediante las que se llevan a cabo homicidios selectivos de trabajadoras sexuales, vendedores de droga, integrantes de la comunidad LGBTI, líderes comunitarios y mujeres a las que se les acusa de ser informantes.

¹¹⁸ Comisión andina de juristas (CAJ). Arauca. Serie Informes regionales de derechos humanos. Bogotá 1994, pp. 15-16.

¹¹⁹ Las comunidades indígenas se hicieron presentes en el territorio desde la época de la conquista. Los conflictos entre colonos campesinos e indígenas en muchos casos derivaron en masacres o “cacerías” de los primeros contra los segundos, conocidas como “guahibiadas” o “cuihiadas” (ibíd., pp. 13-15)

¹²⁰ Aduc-Araucam ACA, Fensuagro, Anmusisc-Arauca, Coogrosarare, Cootransarare, Acaditar y Asou’wa, entre otras; Gutiérrez Lemus, Omar Jaime. Arauca: un territorio de contrastes, 2009, p. 63.

¹²¹ Ibíd., p. 48.

¹²² Sobresalen los *paros cívicos del Sarare* ocurridos entre finales de los 70 y comienzos de los 80 por las difíciles condiciones de vida de los colonos, que ayudaron a visibilizar la influencia y proyección de organizaciones como la ANUC. (ver más en: Medina Gallego, Carlos. “Arauca tierra de colonización y conflicto”).

Un segundo efecto fue la consolidación de las guerrillas del ELN (frente Domingo Laín) y las FARC (frente 10, Guadalupe Salcedo) porque, por un lado, encontraron en la llegada de los nuevos pobladores una ventana de oportunidad para implementar estrategias de formación política, persuasión y adoctrinamiento¹²³ y, por el otro, acomodaron las reivindicaciones de los colonos a sus proyectos y objetivos frente al Estado central¹²⁴.

No obstante, la expansión y consolidación de los grupos guerrilleros fueron favorecidas por el auge de la industria petrolera a mediados de los 80, lo que también determinó el rumbo que tomaría el movimiento social. Aunque desde la década de los 60 se desarrollaron actividades de exploración de hidrocarburos en la región, fue solo hasta el descubrimiento del yacimiento Caño Limón por parte de la multinacional Occidental Petroleum, en 1983, y la posterior construcción del oleoducto Caño Limón–Coveñas, que inició oficialmente la industria petrolera y con ésta una serie de cambios sustanciales en la composición económica, política y social del departamento.

En el ámbito económico, el petróleo se convirtió en el primer renglón productivo de la región desplazando las tradicionales actividades agrícolas¹²⁵ y generó un rápido proceso de urbanización ligada a amplios movimientos migratorios de trabajadores desde el interior del país, que al demandar gran cantidad de bienes y servicios hicieron que se transformara la vocación productiva y comercial de la región¹²⁶.

En el plano político hubo un inusitado interés por parte del Estado en la región después de décadas de abandono. El interés del gobierno se reflejó en el desarrollo de infraestructura (carreteras, aeropuertos, escenarios públicos), pero para captar rentas petroleras más que para brindar condiciones de seguridad y bienestar a la población y de ejercer soberanía¹²⁷. En este sentido, personas entrevistadas en Arauca manifestaron que el nivel de institucionalidad de ese momento fue incapaz de destinar tales recursos en el desarrollo integral del territorio.

Respecto a la dimensión social hubo tres grandes cambios. El primero fue que la visión utilitarista del Estado centrada en la extracción de rentas petroleras hizo que se generara una ola de manifestaciones masivas que expresaban su inconformidad por el desplazamiento de la actividad agrícola¹²⁸ y que reclamaban servicios públicos, vivienda, educación, salud y mayor presencia del Estado¹²⁹. Uno de los ejemplos más importantes fue el *Paro de Nororiente* entre 1987 y 1988, en el que alrededor de 20.000 pobladores del Norte de Santander y de municipios aledaños se movilizaron para presentar un pliego de exigencias ante el Estado¹³⁰. Cabe anotar que el ELN

¹²³ Se expresó en la creación del Frente Domingo Laín del ELN (Echandía, Camilo, Op. Cit., p. 5.) en la conformación del frente Guadalupe Salcedo de las FARC que recibió su nombre en alusión a la fuerte influencia que tuvieron las guerrillas liberales en la región (Ávila, Ariel Fernando. *La frontera caliente entre Colombia y Venezuela*. Corporación Nuevo Arco Iris, 2012, p. 92.)

¹²⁴ Algo que en su momento fue considerado atípico al punto de ser denominado como un fenómeno de “guerrilla social” (Gutiérrez Lemus, Omar, Op Cit, p. 50.)

¹²⁵ CAJ, Op Cit, p. 18.

¹²⁶ Ramiro, Pedro, Gonzáles, Erika & Pulido, Alejandro. *La energía que apaga Colombia. Los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa*. Serie Pensamiento y Futuro. Ediciones Desde abajo. Bogotá, 2007, p. 123.

¹²⁷ *Ibíd.*, p. 54.

¹²⁸ Medina Gallego, Carlos, Op Cit.

¹²⁹ CAJ, Op Cit, p. 16

¹³⁰ Aguilera, Mario. “ELN: entre las armas y la política”. En *Nuestra Guerra sin Nombre: Transformaciones del conflicto en Colombia*. IEPRI/Editorial Norma: Bogotá, 2006.

suspendió los ataques a los oleoductos como señal de apoyo al paro¹³¹. El segundo cambio fue la emergencia de las primeras reivindicaciones indígenas frente al reconocimiento y protección de los territorios ancestrales¹³². Y el tercero fue la consolidación de un entramado social altamente cohesionado con la aparición de organizaciones sindicales a través de la USO y la CUT-Arauca (Sintracarnes, Sintraelectra, Asedar, Anthoc).

Estas tres transformaciones se dieron de manera paralela a la consolidación de las FARC y el ELN. Los grupos guerrilleros continuaron con la conformación de sus estructuras de base, no solo sirviéndose de las necesidades de la población, sino también de la adopción de un modelo de cooptación, subordinación y sometimiento de las estructuras de poder local así como de las organizaciones sociales¹³³. Esto les serviría para impulsar sus demandas que se concentraban cada vez más en la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos, especialmente en el caso del ELN.

En los años siguientes al descubrimiento de Caño Limón, la industria petrolera en la región continuó expandiéndose con la entrada de nuevas compañías extranjeras como la multinacional británico-holandesa Shell y la española Repsol¹³⁴. Esta última se uniría en 1990 a la Asociación Cravo-Norte encargada de operar el yacimiento Caño-limón y bajo otras modalidades de operación firmaría contratos de exploración y explotación (Catleya y Capachos) en otras zonas del departamento, algunas de ellas muy cercanas a resguardos indígenas¹³⁵.

La llegada de Repsol-YPF se caracterizó por los siguientes sucesos. Uno fue la exacerbación de la captación de rentas a través de la extorsión, por parte de los grupos guerrilleros. Por esa vía habrían de aumentar los niveles de militarización de la región, pues fue justo por esos años en los que la Asociación Cravo Norte suscribió un acuerdo de colaboración en el que las empresas extractivas se comprometían a brindar ayuda económica para apoyar a las unidades de la XVIII Brigada¹³⁶. Mediante este acuerdo tanto la OXY, como Ecopetrol y Resol-YPF hicieron llegar fondos al Ejército, pero el apoyo también incluyó el uso de las instalaciones de la OXY para planear operaciones militares y de recursos humanos que tendrían como función contractual, desarrollar labores de vigilancia del oleoducto, pero donde se llegaron a realizar actividades militares¹³⁷.

La presencia de la fuerza pública trajo consigo masivas violaciones a los derechos humanos como la masacre de Santo Domingo (Tame) ocurrida en diciembre de 1998, en la que 17 campesinos murieron y otras 27 personas resultaron heridas por el impacto de una bomba racimo lanzada desde un helicóptero del Ejército¹³⁸. Posterior a este hecho, las autoridades realizaron múltiples ametrallamientos contra la población en sectores aledaños al caserío. Investigaciones realizadas

¹³¹ Galindo, Pedro Elías. *Petróleo y paz: aportes a una metodología para la negociación temática*. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá, 2002.

¹³² Arenas, Luis Carlos. La lucha contra la explotación petrolera en territorio U'wa: estudio de caso de una lucha local que se globalizó., pp. 332.

<http://www.grassrootsinitiativesconsulting.com/sites/grassrootsinitiativesconsultin.drupalgardens.com/files/201306/La%20lucha%20contra%20la%20explotación%20petrolera.pdf>

¹³³ Arenas, Luis Carlos, Op. Cit.

¹³⁴ En 1999 Repsol adquiriría la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales y pasaría a llamarse Repsol-YPF. Esta transacción sería el punto de partida de su expansión en América Latina.

¹³⁵ Ramiro, Pedro (et al), Op Cit., pp. 128-132.

¹³⁶ Amnistía Internacional. *Colombia un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca*. Abril 2004, p. 10.

¹³⁷ Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. *Caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Sentencia de 30 de noviembre de 2012*. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf

¹³⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Op. Cit.

por instancias internacionales prueban que estos sucesos se presentaron en desarrollo de las operaciones aéreas contraguerrillas “Relámpago” y “Pantera”, ejecutadas como reacción a un enfrentamiento entre la fuerza pública y la guerrilla iniciados el día anterior, que se desencadenó después de la interceptación de una avioneta del narcotráfico que aterrizó en zona rural de Tame. En la investigación también se indicó la participación de agentes de seguridad privados que brindaban protección a la OXY, quienes actuaron como agentes estatales, así como la colaboración de la transnacional con la Brigada XVIII en perjuicio de las víctimas, por medio de un avión y un helicóptero¹³⁹. Por los hechos descritos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una sentencia en noviembre de 2012 en la que responsabilizó al Estado colombiano¹⁴⁰.

Asimismo, se cree que la llegada y expansión de Repsol coincidió con la aparición a finales de los 90 de los grupos paramilitares “El Corral” y los “Capuchos”¹⁴¹, lo que supone que fueron empleados para brindar seguridad a la empresa frente a la guerrilla.

En este periodo también se vivió una agudización de la protesta indígena –específicamente de la comunidad U’wa a través de Asou’wa– por la adjudicación sin consulta previa de licencias ambientales para la operación de Repsol en inmediaciones a sus resguardos. El caso de esta comunidad es una expresión clara de inconformidad social frente a los impactos negativos de la expansión petrolera y la negligencia gubernamental, y recibió gran apoyo de otras organizaciones sociales locales e internacionales luego de que anunciaron su intención de llevar a cabo un suicidio colectivo si no se atendían sus demandas¹⁴². A nivel local, el apoyo se tradujo en jornadas de trabajo conjunto y protestas cívicas que involucraron tanto al movimiento social como al movimiento indígena de la región y de otros departamentos del país¹⁴³.

La inconformidad social que fue creciendo en torno a la cuestión petrolera generó una respuesta enérgica por parte del Estado y de las multinacionales petroleras que acabaría por exacerbar la difícil situación de derechos humanos en el departamento, siendo los grupos cívicos, de nuevo, los principales afectados. El comienzo del dos mil estuvo marcado por dos grandes fenómenos en la región: por un lado, el afianzamiento del paramilitarismo, y por el otro, la adopción por parte del gobierno de una política de seguridad altamente represiva hacia la movilización social.

EL paramilitarismo se consolidó de manera tardía en Arauca entre 1999 y 2001, por medio del Bloque Vencedores de Arauca (BVA) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)¹⁴⁴, con combatientes procedentes del sur desde Casanare¹⁴⁵. Parte de la estrategia del BVA consistió en resquebrajar las redes de apoyo de la población civil de las guerrillas por medio de acciones

¹³⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, Op. Cit.

¹⁴⁰ El 30 de noviembre de 2012, la CIDH dictó una sentencia en la que declaró responsable al Estado colombiano por violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento de un dispositivo explosivo (*municiones racimo o clúster*) por parte de la Fuerza Aérea colombiana el 13 de diciembre de 1998 en el caserío Santo Domingo, los ametrallamientos ocurridos posteriormente contra la población y los desplazamientos forzados ocasionados a raíz estos sucesos. De igual manera, la Sentencia ordena al Estado colombiano llevar a cabo una serie de medidas de reparación entre las que se incluyen indemnizaciones a las víctimas y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad.

¹⁴¹ Ávila, Ariel Fernando, Op Cit, p. 101

¹⁴² Arenas, Luis Carlos., Op Cit, pp. 336-337.

¹⁴³ *Ibíd.*, pp. 353-360.

¹⁴⁴ Aunque el Bloque Centauros de las AUC, alcanzó a hacer presencia en Arauca movilizándose desde Meta y Casanare, fue el BVA el que logró posicionarse luego de ser adquirido por dos conocidos narcotraficantes, conocidos con el alias de “Los Mellizos”. (Gutiérrez Lemus, Omar, Op Cit, p. 70).

¹⁴⁵ Ávila, Ariel Fernando, Op Cit, pp. 102-103.

sistemáticas e indiscriminadas como homicidios selectivos, masacres y amenazas en contra de campesinos, periodistas, maestros, trabajadores de la salud, líderes agrarios, sindicales y políticos. En total, la Fiscalía responsabilizó al bloque por 2.321 crímenes de esa naturaleza realizados entre 2001 y 2005¹⁴⁶. Además, esta estructura es señalada de ser una de las más sangrientas de las AUC por sus prácticas de tortura, desaparición y masacres¹⁴⁷. A pesar de las movilizaciones sociales para protestar por la presencia paramilitar en la región y de los acuerdos firmados entre el gobierno y algunas de las más importantes organizaciones sociales para garantizar la seguridad de la población civil, el fenómeno lejos de desaparecer, se afianzó¹⁴⁸.

Además, el periodo de consolidación paramilitar en Arauca entre 2003 y 2005, tuvo tres características que llevan a suponer que el fenómeno fue ampliamente amparado por las Fuerzas Militares¹⁴⁹ y por las empresas petroleras¹⁵⁰ como parte de una estrategia para proteger los intereses energéticos de la nación: 1) las bases paramilitares se ubicaron muy cerca de puestos de la fuerza pública, 2) la presencia y accionar violento del BVA se hizo más evidente en zonas aledañas al oleoducto, y 3) las acciones fueron dirigidas especialmente a líderes sociales y sindicatos energéticos^{151 152}.

En ese contexto, se implementó la Política Nacional de Seguridad Democrática impulsada en el primer mandato de Álvaro Uribe (2002-2006). Bajo este periodo, una de las primeras decisiones de Uribe fue declarar un estado de conmoción interior apelando al artículo 213 de la Constitución que le permitiría luego expedir el decreto 2002 por medio del cual se creaban las Zonas de Rehabilitación y Consolidación (ZRC). Esta estrategia estaba enmarcada dentro de una concepción de seguridad democrática que buscaba el fortalecimiento del Estado de derecho mediante la consolidación gradual del control estatal sobre la totalidad del territorio, para lo cual la fuerza pública jugó un papel muy importante. Las ZRC permitían la aplicación de una o más medidas excepcionales para garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden público en el territorio y la protección de la población. Una de estas ZRC se creó en los municipios de Arauca,

¹⁴⁶ Más puntualmente, información de la Unidad de Justicia y Paz indica que a la estructura se le han imputado 5 masacres con un total de 49 muertos; el reclutamiento forzado de 58 menores; múltiples homicidios políticos entre los que se registran el del enfermero y sindicalista Édgar Sierra, el del representante a la Cámara Octavio Sarmiento, del defensor de DDHH José Rusbell Lara, del Registrador Alejandro Plazas (crimen por el cual se acusó al ex gobernador de Arauca Julio Acosta Bernal), y de los periodistas Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso por hacer acotaciones en contra de las AUC; y 12 hechos de abusos sexuales y servidumbre a mujeres en Arauca (ver más en: <http://www.verdadabierta.com/la-historia/2494-los-crimenes-del-mellizo-mejia-y-los-paras-en-arauca>; <http://www.verdadabierta.com/tierras/41-victimas/violencia-contra-mujeres/5133-mujeres-de-arauca-torturadas-y-esclavizadas>; <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/imputaciones/4983-el-terror-que-sembro-el-bloque-vencedores-en-arauca>).

¹⁴⁷ Verdad Abierta. "Los desaparecidos del Bloque Vencedores de Arauca". <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/4615-los-desaparecidos-del-bloque-vencedores>.

¹⁴⁸ Amnistía Internacional, Op Cit, p. 31.

¹⁴⁹ Existen pruebas de acciones coordinadas como la denominada operación "Arawac" llevada a cabo en 2001 por parte de las brigadas XVI con base en Casanare, la brigada XVIII, la FUDRA y otras unidades que amenazaron a la comunidad con incursiones paramilitares por sus supuestos nexos con la guerrilla en la ejecución de atentados contra el oleoducto (Amnistía Internacional, Op Cit, p. 30-31).

¹⁵⁰ Gonzáles Posso, Camilo. *Petróleo y transformación de conflictos. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (INDEPAZ)*. Bogotá, 2011, p. 43-44.

¹⁵¹ En septiembre de 2002, las AUC emitieron amenazas de muerte contra sindicalistas de Arauca por supuestos vínculos con grupos subversivos y los declaraban objetivo militar, en los panfletos se leía lo siguiente: "Existen algunas personas, sindicalistas, directores, comprometidos con grupos subversivos, estos líderes son declarados objetivo militar de nuestras unidades" (ver más en: Amnistía Internacional, Op Cit. P. 20).

¹⁵² Ávila, Ariel Fernando, Op Cit, p. 106.

Saravena y Arauquita, zona norte por donde pasa el oleoducto, excluyendo los municipios del sur que contaban con presencia paramilitar.

La medida significó la militarización de Arauca y contó con un amplio respaldo por parte del gobierno de Estados Unidos que, además de seguir apoyando el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la lucha antinarcóticos a través del Plan Colombia, aumentó las ayudas para financiar directamente la guerra contrainsurgente. Un ejemplo fue el “Plan Escudo”¹⁵³ o la ayuda para la protección del oleoducto con helicópteros y equipos de inteligencia para la Brigada XVIII y para la creación de la Brigada Móvil Nº 5. A pesar de que la Corte Constitucional se pronunció en contra de la renovación del estado de emergencia y declaró inconstitucional el decreto 2002 (sentencia 327/03, 29 de abril de 2003), el gobierno mantuvo las facultades otorgadas al Ejército a través de reformas legales, lo cual se traduciría después en graves violaciones a los DDHH, especialmente de líderes sociales.

Durante la vigencia de la Zona de Rehabilitación se registró un aumento de las violaciones de los DDHH, especialmente de activistas sociales y sindicales¹⁵⁴. De hecho, un informe de Amnistía Internacional sobre las ZRC, plantea que entre enero y noviembre de 2003, Arauca fue escenario de más del 47% de los homicidios y las detenciones y privaciones arbitrarias de libertad ocurridas contra sindicalistas en Colombia¹⁵⁵. De ahí que las medidas del gobierno, lejos de ayudar a estabilizar la región, empeoraron el conflicto al militarizar la vida familiar y comunitaria, y criminalizaron y estigmatizaron al movimiento social. Cualquier expresión de inconformismo, reclamo y defensa de los derechos humanos se relacionaba con apoyo a la guerrilla¹⁵⁶, con lo que se justificaron acciones de opresión indiscriminada que silenciaban las protestas en contra de los impactos negativos de la actividad petrolera¹⁵⁷.

¹⁵³ *Ibíd.*, p. 10.

¹⁵⁴ Algunas ejemplos de esto fueron: la detención por parte de la fuerza pública de 2.000 personas en Saravena en noviembre de 2002, episodio en el que los detenidos fueron concentrados en el coliseo del municipio, reseñados y marcados con un sello de tinta indeleble (96 de estas fueron judicializadas, entre las que se encontraban 43 líderes sociales y funcionarios públicos); el homicidios de tres concejales, el asesinato de cuatro profesores del sindicato ASEDAR ese año y cerca de 21 activistas entre 2001 y 2003 pertenecientes a organizaciones sindicales como FECODE, Anthoc, Sindicons Sintroepar, Sintraemsdes, así como varios periodistas e indígenas; el allanamiento en agosto de 2003 por parte de la fuerza pública, la fiscalía y dos personas encapuchadas a sedes de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos y a las casas de varios líderes, y la detención de 42 personas en ese mismo día, entre quienes se encontraban 14 sindicalistas y 5 líderes comunitarios; la detención de la directora de la Asociación Campesina de Arauca en diciembre de 2003 después de apoyar una misión de observación de los efectos de las fumigaciones; el asesinato de dos reconocidos líderes sociales en 2004, el asesinato del alcalde de Saravena ese año, detenciones por parte del Ejército de miembros de gremios y sindicatos como la CUT, de Aca y de Aduc, el asesinato y amenazas por parte de los paramilitares a miembros de Enelar y de Sintraelecol, así como la muerte de 3 líderes sindicales en medio de una operación antiguerrilla en Arauquita, los cuales pertenecían a Anthoc, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos respectivamente, crímenes por los cuales fueron destituidos e inhabilitados un subteniente y tres soldados pertenecientes al grupo mecanizado Reveiz Pizarro; el asesinato de Alejandro Torres, médico perteneciente a Anthoc; amenazas a 16 periodistas del departamento (ver más en: <http://www.nocheyniebla.org/files/u1/25/pdf/CIFRAS.pdf>; Amnistía Internacional, Op Cit, pp. 20-26; Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República. Algunos indicadores sobre la situación de los derechos humanos en el departamento de Arauca; <http://www.acnur.org/t3/uploads/media/642.pdf?view=1>).

¹⁵⁵ Amnistía Internacional, Op Cit, p. 21.

¹⁵⁶ Ramiro, Pedro (et al), Op cit, p. 145.

¹⁵⁷ Ramiro, Pedro (et al), Op cit, p. 146-147.

Para la segunda década del dos mil, las inconformidades alrededor del tema petrolero y la actuación del Estado siguieron presentes en parte de la población araucana. En la elaboración de esta investigación se identificaron al menos tres. Primero, persiste la sensación de que las empresas petroleras tienen estigmatizada a la población civil de pertenecer a grupos guerrilleros. Y según lo expresaron algunas personas entrevistadas, debido a esta imagen las empresas sólo contratan gente de las comunidades para que realicen trabajos temporales de mano de obra no calificada durante dos o tres meses y no para labores de largo plazo, lo que provoca que las petroleras no constituyan una fuente laboral estable.

Puntualmente, la FIP encontró que algunos sectores de la población no tienen una buena imagen de la OXY –empresa que se encarga de la explotación del yacimiento de Caño Limón–. Por un lado, se considera que hubo poca inversión en la población de las ganancias obtenidas durante la bonanza petrolera por parte de esta empresa. Y por otro, que la empresa no ha resarcido lo suficiente por los daños medioambientales ocasionados por sus operaciones, lo que ha provocado un importante rechazo por la ocupación de un cauce en la laguna del Lipa en límites entre Arauca y Arauquita, para la realización del Proyecto Chipirón. Según la población, estas perforaciones están generando afectaciones en las fuentes hídricas y en la población de peces de la zona.

Una segunda inconformidad se basa en la percepción que tiene la población sobre el abandono del Estado central hacia el departamento de Arauca. Las personas entrevistadas en la región enfatizaron en que uno de los principales problemas que tiene Arauca es que la inversión dirigida hacia los sectores rurales es muy poca. Por ejemplo, se mencionó el mal estado de las vías terciarias, que impide movilizar productos agropecuarios, y la falta de programas para preparar a los jóvenes en vocaciones agropecuarias.

Y una tercera inconformidad tiene que ver con la fuerza pública. Se percibe que la única función que cumple es cuidar los oleoductos y que no se preocupa por la seguridad de la población de Arauca. Esta frustración se ha incrementado teniendo en cuenta el alto grado de militarización en el que se encuentra el departamento. A pesar de que los atropellos y campañas de intimidación en contra de la organización social han continuado¹⁵⁸, el movimiento social de Arauca ha seguido avanzando en la reivindicación de sus derechos. Se destacan las huelgas declaradas en 2011 por la CUT para exigir mejores condiciones laborales¹⁵⁹ y un paro cívico indefinido de sindicatos, campesinos y JAC para exigir reparaciones por el impacto social y ambiental de la explotación petrolera en 2013 –que tuvo como efecto la firma de un plan por 1,7 billones de pesos para inversión en infraestructura, seguridad y tecnología¹⁶⁰. También sobresale su activa participación en el paro nacional agrario declarado en 2013¹⁶¹ y en el encuentro preparatorio de la Cumbre

¹⁵⁸ Según relataron líderes entrevistados en Arauca, las amenazas y afectaciones hacia los líderes sociales y de víctimas, no han cesado, afectando la organización social en el departamento. Por un lado, cualquier reivindicación social es desestimada por asumirse que es una expresión de los intereses de la guerrilla. Y por otro lado, los líderes sociales están bajo constante riesgo. Por ejemplo, se comentó que varios de los integrantes de la Mesa de Víctimas han sido amenazados (no es claro quiénes son los responsables, aunque los entrevistados sospechan que se trata de estructuras criminales), y para principios de 2015 se registraron atentados a tres de los integrantes de la Mesa.

¹⁵⁹ CUT. “Aprobada huelga de trabajadores petroleros en Arauca”. <http://cut.org.co/aprobada-huelga-de-trabajadores-petroleros-en-arauca/>

¹⁶⁰ El Espectador. “Este gobierno dialoga, no le teme a la protesta social: Santos”.

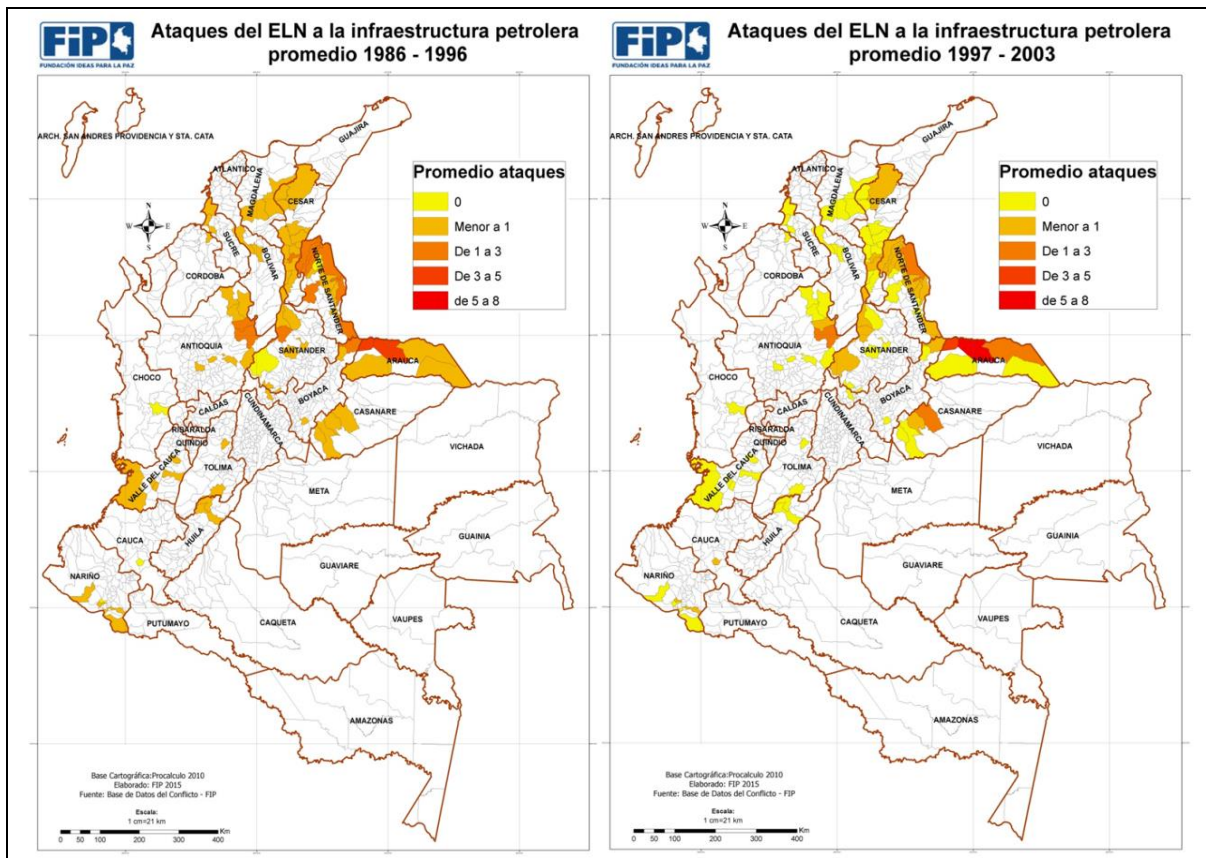
¹⁶¹ Pacocol. “La Mesa de organizaciones Cívicas y populares de Arauca envían carta a gobernador y alcalde”. <http://www.pacocol.org/index.php/comite-regional/arauca/5755-la-mesa-de-organizaciones-civicas-y-populares-de-arauca-envian-carta-gobernador-y-al-alcalde>

Agraria en 2014 para abordar temas relacionados con el despojo, la territorialidad, las prácticas culturales, los cultivos ilícitos, la ruralidad y los sectores populares¹⁶².

3.4 Tendencias y motivaciones de los ataques en Arauca y su relación con el ELN

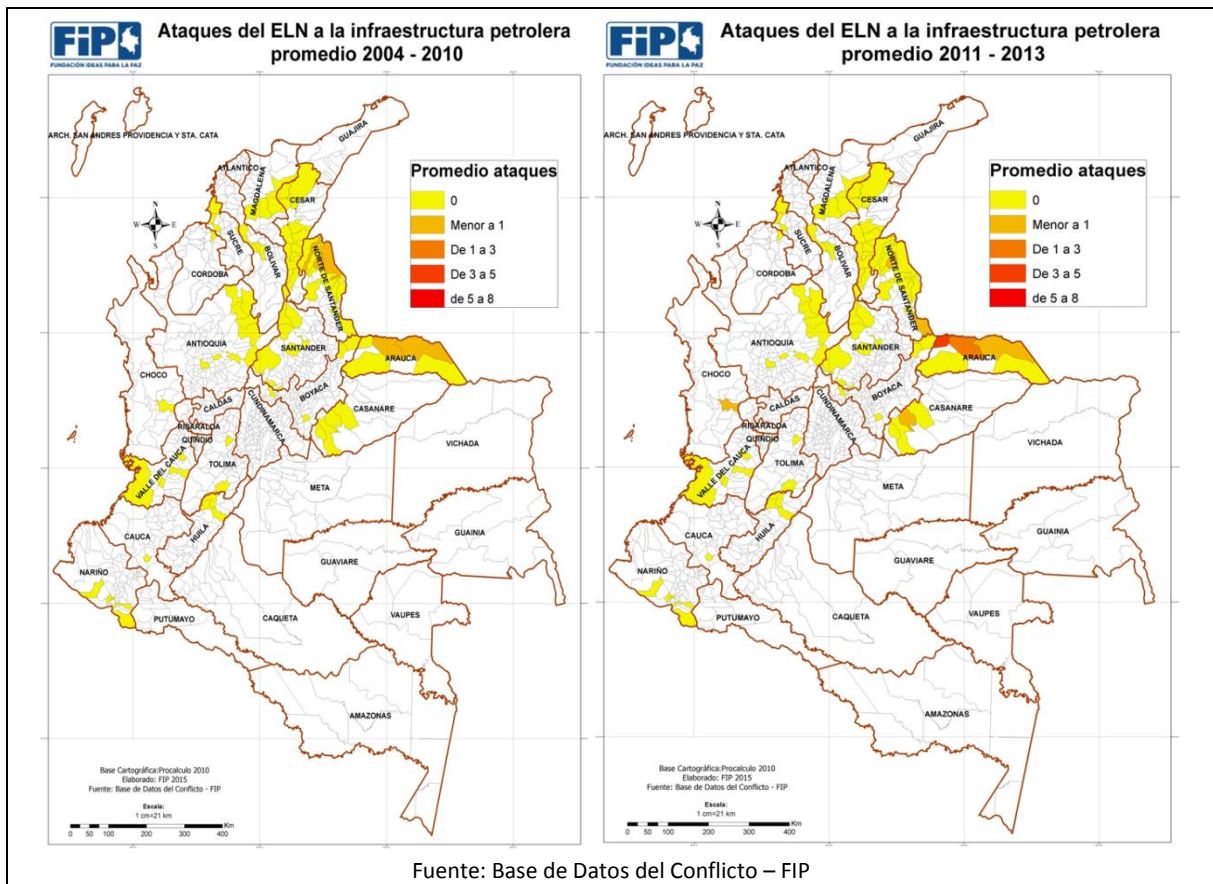
Como ya se afirmó, los ataques a la infraestructura petrolera por parte de actores armados están estrechamente vinculados a su racionalidad y motivaciones, que no necesariamente se circunscriben a finalidades económicas. Con el caso de Arauca se pretende observar esto, además de las tendencias en las acciones en contra de la infraestructura petrolera a nivel nacional y departamental. Para este análisis se usó la Base de Datos del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz y las cifras suministradas por Ecopetrol, lo que permitió contrastar los datos y las tendencias, y complementar el análisis.

MAPAS 1. ATAQUES DEL ELN A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA (1986-1996; 1997-2003; 2004-2010; 2011-2013)



¹⁶² Colombia informa. "Arauca: inicia encuentro hacia la Cumbre Agraria, étnica y popular".

<http://www.colombiainforma.info/mov-sociales/159-pueblos/1216-arauca-inicia-encuentro-hacia-la-cumbre-agraria-etnica-y-popular>



De acuerdo con la Base de Datos del Conflicto FIP, entre 1986 y 1999, el ELN no sólo dependía financieramente del sector de hidrocarburos, sino que fue el principal responsable de los atentados contra la infraestructura del país (ver mapas 1). En el caso de Arauca, entre 1986 y 1997, el ELN fue el responsable de 129 ataques de este tipo de un total de 138, lo que equivale a un 93.5%. De hecho, entre 1986 y 1999 se observa una tendencia ascendente en los atentados a la infraestructura donde se pasó de 3 en 1986 a 30 en 1999, con un pequeño pico en 1988, cuando se realizaron 21 ataques (ver gráfica 1). Esta tendencia fue producto de la importancia que adquirió la voladura de los oleoductos en el proceso de fortalecimiento financiero, político y militar del ELN en Arauca. A su vez, este comportamiento se enmarcó en el Primer y Segundo Congreso de la organización, celebrados en 1986 y de 1989, en los que definen como objetivo militar a la industria petrolera.

Como se ha venido advirtiendo, la construcción del oleoducto Caño-Limón le permitió al Domingo Laín encontrar una fuente fácil de financiación¹⁶³. Ejemplo de ello fue el millonario pago de la Mannesmann al ELN en 1983 por el secuestro de dos de sus trabajadores. Este pago le permitió al ELN darse cuenta que el sector petrolero era una fuente relativamente fácil de obtención de dinero¹⁶⁴, por lo que generó una política de ataques sistemáticos contra el oleoducto, el cual sufrió

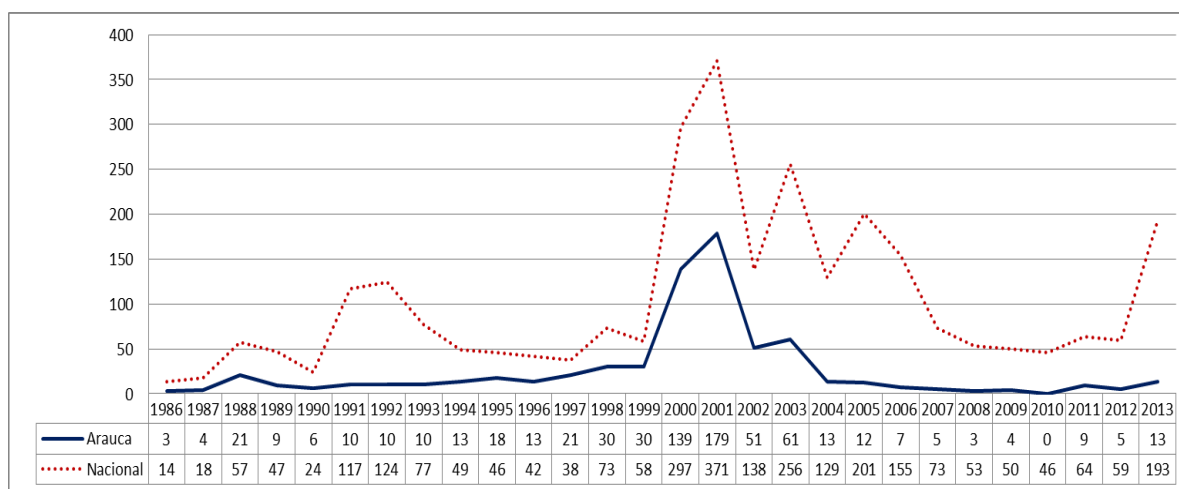
¹⁶³ Peñate, Andrés (1998). Op. cit.

¹⁶⁴ Peñate, Andrés (1998). Op. cit.

más de 20 voladuras en los años siguientes, sumado a otros 15 ataques contra otras instalaciones petroleras en el departamento¹⁶⁵.

Con estos ingresos, el Domingo Laín se expandió desde el municipio de Arauca hacia el noreste, ubicando sus estructuras a lo largo del oleoducto, “hasta llegar a las sabanas del departamento de Cesar, de manera casi paralela a la frontera con Venezuela”¹⁶⁶. Precisamente fue con esta expansión de frentes, con origen en el Domingo Laín, que se conformó el Frente de Guerra Nororiental¹⁶⁷.

GRÁFICA 1. ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL Y EN ARAUCA 1986-2013



Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP

En lo estratégico, el aumento de la producción petrolera y la importancia frente a la economía nacional convirtió a los hidrocarburos en “un punto neurálgico de presión contra los intereses del país”¹⁶⁸. Esto le permitió al ELN dar publicidad a su campaña en contra de la explotación de hidrocarburos y recuperar la visibilidad política que había perdido en años anteriores, donde quedó en un segundo plano después de los fuertes golpes de la fuerza pública en la década del 70.

A su vez, el ELN utilizó la voladura del oleoducto Caño-Limón como una forma de adquirir apoyo popular. Al culminar la construcción del oleoducto en 1986, el ELN vio que los atentados contra el tubo obligaban al uso de mano de local para pequeños proyectos de reconstrucción, lo que le permitió convertirse en intermediario y ente regulador de estas necesidades y, por consiguiente, conseguir apoyo de la población local vecina al tubo¹⁶⁹. Este esquema “le permitió intermediar recursos de ayuda comunitaria entre el proyecto y las comunidades vecinas”¹⁷⁰ lo que generó una relación de beneficio recíproco entre las comunidades. Por un lado, el ELN exigía a los contratistas vincular a los trabajadores de la comunidad y obligarlos a invertir en ayudas comunitarias. Y por

¹⁶⁵ Semana.com (31 de enero de 2015). El escándalo de la Mannesman. Disponible en <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-escandalo-de-la-mannesmann/416529-3>

¹⁶⁶ Peñate, Andrés (1998). Op. cit. p. 25

¹⁶⁷ Peñate, Andrés (1998). Op. cit.

¹⁶⁸ Peñate, Andrés (1998). Op. cit. p. 24

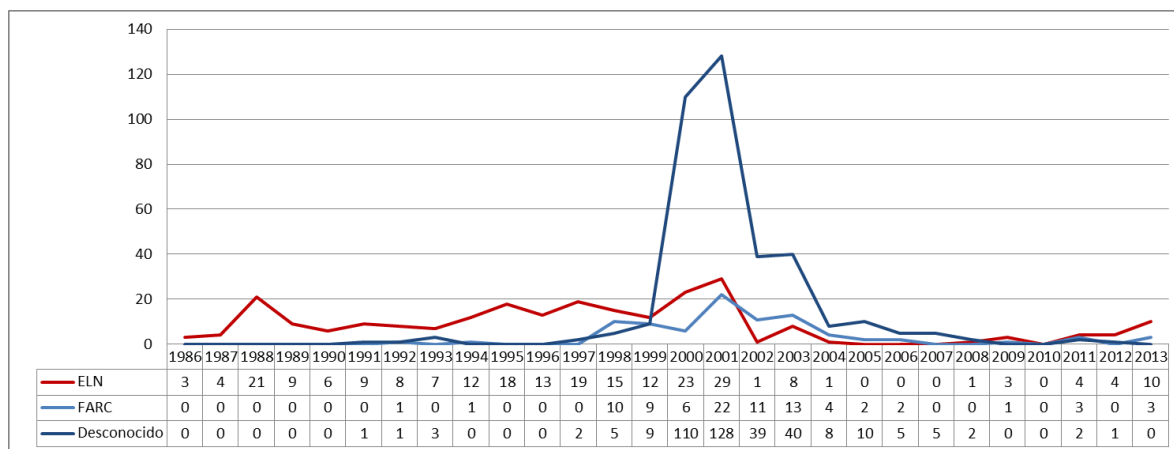
¹⁶⁹ Peñate, Andrés (1998). Op. cit.

¹⁷⁰ Peñate, Andrés (1998). Op. cit. p. 25

otro lado, las comunidades a cambio de estos beneficios estaban dispuestas a seguir sus instrucciones¹⁷¹.

Entre 1999 y 2001 se presentó un aumento sustancial en los ataques a la infraestructura donde en 1999 se presentaron 58 acciones a nivel nacional y 30 en Arauca, y en el 2000, 297 y 139 respectivamente. En 2001 se registraron 179 eventos en Arauca y 371 a nivel nacional, cifras que representan el pico histórico de ataques (ver gráfica 1). En cuanto a Arauca, este incremento está relacionado con el fortalecimiento militar de las FARC en la región, por su participación en el control de cultivos de coca y actividades de narcotráfico¹⁷², y su vinculación a los ataques a la infraestructura como forma de presionar a las empresas para el pago de extorsiones. Muestra de esto último es que las FARC pasaron de cometer 10, 9 y 6 ataques en 1998, 1999 y 2000, respectivamente, a 22 en 2001. Por su parte, el ELN mantuvo una tendencia similar entre 1994 y 1998, año en el que pasaron de 15 ataques a 12 en 1999. En 2000 y 2001 se presentó un aumento en sus acciones con 23 y 29 acciones, respectivamente.

GRÁFICA 2. ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA EN ARAUCA POR ACTOR 1986-2013



Fuente: Base de Datos del Conflicto – FIP

En su momento, los 29 atentados del ELN representaron 16,2% del total de los hechos en el departamento, cifra que parece baja y que no permite observar la participación real de estos grupos en los atentados debido al alto subregistro que tiene la base de datos del conflicto.

Las acciones realizadas en estos años tuvieron un propósito netamente económico por parte de las FARC y el ELN, así el segundo haya mantenido vigente su discurso sobre la explotación petrolera. No es de extrañar, entonces, que en algunas de las entrevistas se evidencia que el discurso contra la explotación petrolera del ELN se entrelace con el propósito extorsivo de los atentados.

Ahora bien, a partir de 2002 el número de atentados a la infraestructura petrolera en Arauca tiene una tendencia descendente hasta 2010, año en que no se registraron hechos en el departamento. En el caso de los ataques atribuidos al ELN después del pico de 2001, también tienen una reducción significativa a tal punto que en 2005, 2006, 2007 y 2010 no se registraron hechos. Esta

¹⁷¹ Peñate, Andrés (1998). Op. cit. p. 25

¹⁷² Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. *Panorama actual de Arauca y Casanare*. Op. cit.

caída está relacionada con dos factores. El primero tiene que ver con la intensión de los paramilitares (quienes habían logrado posicionarse en Puerto Rondón, Cravo Norte, Arauca capital y Tame) de entrar a las zonas históricas de los grupos guerrilleros (Saravena, Arauquita y Fortul) en 2002, lo que obligó a las FARC y al ELN a concentrar sus esfuerzos en contener la arremetida paramilitar. Un segundo factor está relacionado con la implementación del Plan Colombia y la declaración de Arauca como Zona de Rehabilitación y Consolidación en 2002, medidas con las que se creó un batallón de helicópteros¹⁷³, se enviaron 70 tropas especiales estadounidenses para iniciar un programa de protección al oleoducto¹⁷⁴ y se dio vía libre a través de medidas excepcionales para que el gobierno central administrara la región a través de autoridades militares¹⁷⁵. Asimismo, la implementación del Plan Meteoro para proteger las vías y las inversiones de más de 130 empresas, influyó en la reducción de los ataques entre 2007 y 2010¹⁷⁶.

Bajo este contexto de fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el incremento de la ofensiva militar, la consolidación paramilitar y la puesta en marcha de la política de seguridad de los dos gobiernos de Álvaro Uribe, el ELN vio su capacidad militar fuertemente afectada. Además, durante la segunda mitad de la década, especialmente entre 2007 y 2010, la fuerte disputa que sostuvo con las FARC por el control del territorio en Arauca, mantuvo bastante disminuido su poder militar¹⁷⁷, lo que se tradujo en la reducción de los atentados con relación al total: el 19% según Ecopetrol y únicamente el 6% de acuerdo con la Base de Datos de la FIP. En cambio las FARC¹⁷⁸ fueron responsables de la mayoría de los ataques a la infraestructura petrolera: el 80% de acuerdo a las cifras de Ecopetrol o el 71,3% según la base de la FIP.

Entre 2011 y 2013, la tendencia en los ataques vuelve a ser ascendente a nivel nacional y departamental (ver gráfica 3), aunque se mantuvo por debajo de los niveles registrados durante principios del dos mil. Así lo muestran las cifras de la base de datos de la FIP a nivel nacional en 2013, año que registró el mayor número de atentados en este periodo (193 acciones), mientras que para 2001 se realizaron 371. En Arauca, mientras en el 2013 se presentaron 13, en 2001 cometieron 179 ataques (ver gráfica 1).

El aumento en las cifras de atentados está relacionado con el accionar del ELN quien se convirtió nuevamente en el actor con mayor protagonismo en los ataques a la infraestructura (ver gráficas 2 y 4). Tal repunte en su accionar se enmarca en una dinámica más amplia de recuperación de la capacidad militar como resultado del acuerdo de no agresión establecido entre el ELN y las FARC en el departamento a finales de 2010¹⁷⁹. En estos años se observa una disminución de las acciones de las FARC, quienes perdieron protagonismo en los atentados desde 2007, durante la disputa

¹⁷³ Verdad Abierta. "Arauca: prueba ácida para el proceso de paz". 15 de diciembre de 2014.

<http://www.verdadabierta.com/procesos-de-paz/ELN/5551-arauca-prueba-acida-para-el-proceso-de-paz>

¹⁷⁴ Dunning, Thad and Wirspa, Leslie. Oil and the Political Economy of Conflict in Colombia and Beyond: A Linkages Approach. Geopolitics, vol. 9, no. 1 (Spring 2004) pp. 81-108.

¹⁷⁵ Amnistía Internacional. *Colombia un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca*. Abril de 2004.

¹⁷⁶ Fundación Paz y Reconciliación -PARES- (2013b). Op. cit.

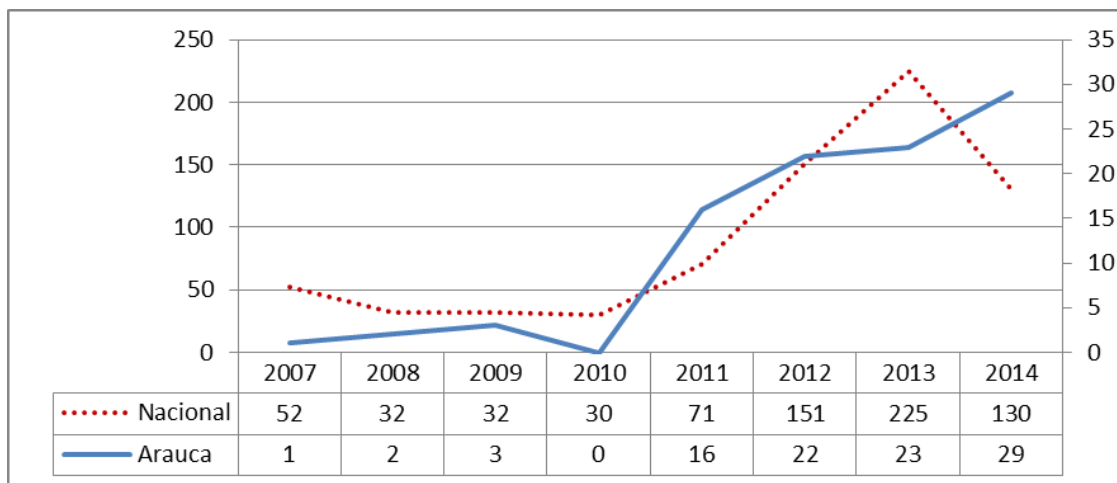
¹⁷⁷ Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH. *Diagnóstico departamental Arauca*. Bogotá, 2007.

¹⁷⁸ Para el caso de las FARC los atentados contra la infraestructura petrolera se han convertido importante pieza dentro de su estrategia militar, por lo que pusieron en marcha la creación de las "Comisiones de mineros". Estas son unidades guerrilleras especializadas en ubicar explosivos para el sabotaje. La "comisiones de mineros" se han implementado principalmente en los departamentos de Putumayo, Nariño, Arauca y Norte de Santander y estarían por entrar en funcionamiento en Caquetá y Antioquia, principalmente para atacar los camiones que transportan crudo y los ataques se realizarían a la orilla de las carreteras (ver más en: Fundación Paz y Reconciliación -PARES-, 2013b)

¹⁷⁹ Fundación Ideas para la Paz. *Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario*. Junio de 2014.

territorial con el ELN. La disminución en los atentados por parte de las FARC desde 2010, podría deberse a que esta guerrilla se ha concentrado en los ataques contra la fuerza pública y al control del negocio del narcotráfico. Según una entrevista, desde 2007 el ELN no participa en este negocio en Arauca¹⁸⁰.

GRÁFICA 3. ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA EN COLOMBIA Y ARAUCA 2007 -2014



Fuente: Ecopetrol (corte diciembre de 2014).

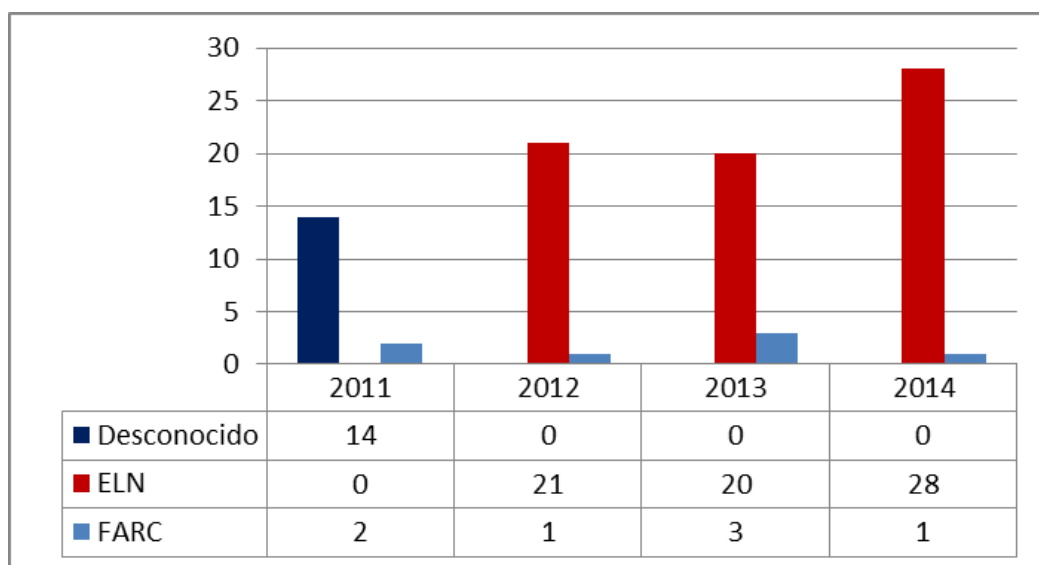
Para 2014, según las cifras de Ecopetrol, el comportamiento en Arauca se diferencia del nacional. En este año, a nivel nacional se presenta un cambio en la tendencia de los años anteriores, donde se nota una importante disminución al pasar de 225 acciones en 2013 a 130 en 2014. Por su parte, en el departamento continúan aumentando las acciones contra el oleoducto donde se evidenció un incremento del 26% al pasar de 23 acciones en 2013 a 29 atentados en 2014 (ver gráfica 3). En este año, el ELN continúa siendo el principal responsable de los ataques a la infraestructura petrolera, donde llevó a cabo entre enero y diciembre el 96,5% de los atentados, es decir, realizó 28 de los 29 hechos registrados en el departamento (ver gráfica 4).

Desde el 2011, el comportamiento de los atentados a la infraestructura petrolera en Arauca está relacionado a objetivos muy claros. Bajo una perspectiva económica, estas acciones siguen teniendo un propósito extorsivo porque se busca presionar a las empresas petroleras al pago de extorsiones. Según la información recolectada en la zona, se presiona más a los contratistas que a las empresas grandes, debido a que estas cuentan con mejores mecanismos de seguridad. En este sentido, “no se extorsiona a las empresas grandes porque ellos saben que no pagan. Se extorsiona a los contratistas”¹⁸¹. Asimismo, estas acciones buscan el fortalecimiento económico de la estructura armada del ELN, que había quedado fuertemente diezmada, donde el sector de hidrocarburos se convirtió nuevamente en su principal fuente de financiación.

¹⁸⁰ Según el entrevistado “Ellos [el ELN] estuvieron metidos en eso [narcotráfico] hasta el 2007. Acordaron que la coca no iba a ser más una forma de financiación y la gente abandonó la coca y se pasó al contrabando”. (Entrevista realizada en Arauca el 1 de enero de 2015.)

¹⁸¹ Entrevista realizada en Arauca el 23 de enero de 2015.

GRÁFICA 4. ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA POR ACTOR EN ARAUCA 2011-2014



Fuente: Ecopetrol (corte a diciembre 15 de 2014)

En este sentido, según las entrevistas realizadas, el incremento de las acciones en contra del tubo está relacionado con la pérdida del control de las administraciones locales y, por ende, de los recursos públicos. Esta pérdida ha sido compensada por el ELN aumentando la presión sobre las empresas petroleras para el pago de extorsiones, lo que incrementa los ataques a la infraestructura. En este caso, algunas personas señalaron que “las petroleras pagan vacunas y cuando no pagan es que se realizan los atentados”. A su vez, “los ataques a la infraestructura se incrementan generalmente cuando los contratistas no se portan bien, cuando no pagan”¹⁸².

Asimismo, para algunos de los entrevistados, las voladuras tienen el propósito de presionar al gobierno departamental a pagar extorsiones¹⁸³. Esto se da porque el ELN pierde el control de la gobernación al llegar Julio Acosta, quien habría sido puesto por los paramilitares. Uno de los pobladores asevera: “Para que no tocan la infraestructura Julio Acosta pagó del gobierno departamental [al ELN]”¹⁸⁴, hecho que no se puede constatar con la revisión de prensa. Otro de los entrevistados añade: “las guerrillas le han trabajado mucho a la extorsión al gobierno departamental porque se ven muy afectados por las voladuras del tubo”¹⁸⁵.

Por otro lado, la disminución de los ataques estaría relacionada con el negocio del contrabando. Así, cuando las guerrillas aumentan sus ingresos por el contrabando, los atentados disminuyen. “La muerte de Chávez y el resquebrajamiento de la economía venezolana llevó a menor ganancia por el contrabando y por eso aumentaron los ataques (...). La disminución de los ataques hasta 2013 [entre 2013 y 2014] se dio por los inicios de las conversaciones con el gobierno y porque se dedicaron al contrabando de gasolina y alimentos”¹⁸⁶, dice otro entrevistado.

¹⁸² Entrevista realizada en Arauca el 20 de enero de 2015.

¹⁸³ Entrevista realizada en Arauca el 22 de enero de 2015.

¹⁸⁴ Entrevista realizada en Arauca el 22 de enero de 2015.

¹⁸⁵ Entrevista realizada en Arauca el 22 de enero de 2015.

¹⁸⁶ Entrevista realizada en Arauca el 21 de enero de 2015.

Sin embargo, la motivación económica no es la única que estimula o desincentiva los atentados. En este sentido, la FIP identificó que los ataques en los últimos tres años también se enmarcan en el contexto de las negociaciones de La Habana, donde se ha abierto la posibilidad de una negociación con el ELN. Esto ha generado “la convicción de su dirigencia [ELN] de que se va a producir un acuerdo con las FARC y de ahí sus grandes esfuerzos para lograr la inclusión en las negociaciones con el gobierno actual”¹⁸⁷. En este caso, como lo afirman algunos entrevistados, “los atentados buscan mostrar poderío y que [el ELN] está vivo para entrar fuertes a la negociación con el gobierno”¹⁸⁸ o “los ataques también son para presionar a que el gobierno les ponga cuidado”¹⁸⁹.

Como se puede observar, los atentados tienen el propósito de mostrar al ELN como una guerrilla fortalecida militarmente, un actor aún relevante y vigente y como una organización con capacidad para afectar los ingresos e intereses del Estado. Esto podría explicar el descenso de los ataques del ELN a los oleoductos en 2014, año de inicio de los acercamientos entre este grupo y el gobierno.

Por otro lado, la desventaja en el plano militar que tiene esta guerrilla frente a la fuerza pública ha servido para que los ataques a la infraestructura se conviertan en una táctica de confrontación indirecta con las Fuerzas Militares. En este caso, un atentado contra un tubo significa que el Ejército debe movilizar tropa y, por consiguiente, correr el riesgo de ser sorprendidos con explosivos, minas antipersonal o francotiradores. Con este ejemplo se observa las múltiples motivaciones o niveles de los atentados a la infraestructura: afectan a las Fuerzas Militares física y moralmente, muestran al grupo guerrillero militarmente fuerte y con capacidad de daño de cara a la negociación y, presionan el pago de extorsiones.

El ELN ha atacado directamente a los contratistas, como ocurrió en septiembre de 2014 cuando francotiradores pertenecientes al frente Héctor, estructura adscrita al Frente de Guerra Nororiental, atacaron a dos contratistas de Ecopetrol que realizaban una inspección al oleoducto Caño Limón–Coveñas, en el corregimiento de El Aserrío en Teorama, Norte de Santander¹⁹⁰. Asimismo, los empleados de las empresas de reparación se han visto afectados por la siembra de minas antipersonal por parte de la guerrilla, como sucedió el 9 de julio de 2014 en la vereda de La Pajuela en el municipio de Saravena, cuando un trabajador de la empresa Termo Técnica, contratista de Ecopetrol, resultó herido al pisar una mina mientras realizaba trabajos de reparación en oleoducto Caño–Limón¹⁹¹.

Por último, para el ELN los atentados contra la infraestructura siguen siendo una forma de conseguir apoyo político. Algunos de los entrevistados manifiestan que “el ELN gana apoyo político porque le da trabajo a la gente de las comunidades”¹⁹². Un habitante de la zona lo deja entrever con mayor claridad: “es que no le han dado al tubo, entonces, no tenemos trabajo”¹⁹³. Y otro afirma: “con las voladuras le dan trabajo a las comunidades porque un derrame grande puede

¹⁸⁷ Echandía, Camilo. Op. cit. Pp. 21

¹⁸⁸ Entrevista realizada en Arauca el 22 de enero de 2015.

¹⁸⁹ Entrevista realizada en Arauca el 20 de enero de 2015.

¹⁹⁰ Revista Semana. “Asesinan a dos contratistas de Ecopetrol en el Catatumbo”. 15 de septiembre de 2014. Disponible en <http://www.semana.com/nacion/articulo/dos-contratistas-de-ecopetrol-son-asesinados-en-norte-de-santander/402883-3>

¹⁹¹ Voz del Cinaruco (Julio de 2014). Trabajador petrolero resulta afectado por mina antipersonal en Saravena, Arauca. Disponible en <http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=10430>

¹⁹² Entrevista realizada en Arauca el 21 de enero de 2015.

¹⁹³ Entrevista realizada en Arauca el 21 de enero de 2015.

necesitar 500 o 1000 personas para hacer la limpieza del río”¹⁹⁴. Esto muestra que la voladura de los oleoductos continúa siendo una fuente de trabajo para las comunidades, donde el ELN sigue siendo un intermediario. Así lo manifiesta otro entrevistado: “cuando le pegan al tubo la empresa contrata a un contratista de la comunidad para arreglar el daño. El ELN es quien pone al contratista y éstos le dan plata al ELN”¹⁹⁵.

Otro de los elementos que favorece al discurso del ELN y, por lo tanto, la obtención de apoyo social es la ineficiencia institucional, donde “las comunidades ven que el gobierno cuida más el tubo que a las comunidades”¹⁹⁶. En este caso, al ver la gran inversión del Estado en seguridad para las empresas y no en las comunidades, se profundiza la inconformidad frente a las instituciones regionales y nacionales, y por ende, proporciona solidez y en cierta medida legitimidad, al discurso guerrillero. A su vez, la percepción de las comunidades sobre el manejo corrupto que se le da a las regalías ha impactado la visión de los atentados¹⁹⁷. “La corrupción no es sólo entre los políticos, también entre las empresas petroleras. Los líderes comunitarios al ver tanta impunidad de gobernantes y petroleras avalan hasta cierto punto las acciones de sabotaje al oleoducto”¹⁹⁸.

Por otra parte, la disminución en los atentados no se debe reducir a la voluntad de los grupos guerrilleros, sino que también está relacionada con el incremento del pie de fuerza militar y con la tecnología implementada para vigilar el tubo. Algunas personas señalan que la reducción de los atentados en 2014 está relacionada con una mayor presencia y mejor reacción del Ejército y también con la Política de Seguridad Democrática, como ocurrió con la tendencia a la baja entre 2004 y 2010: “la Seguridad Democrática disminuye los ataques porque se aumenta la presencia de la fuerza pública y empieza a tener mayor éxito la inteligencia”¹⁹⁹.

A nivel municipal, los datos de Ecopetrol indican que en Arauca, entre 2012 y 2014, los municipios más afectados por los ataques a la infraestructura petrolera del ELN fueron Saravena con 36 y Arauquita con 18 (ver gráfica 6). En 2014 se registraron ataques en Saravena (8), Fortul (8), Arauquita (7) y Tame (5). Cabe anotar que Saravena y Arauquita son municipios donde se encuentra el oleoducto y donde el ELN ha tenido presencia histórica.

Estas cifras concuerdan con la información recolectada durante el trabajo de campo. Durante las entrevistas se evidenció que los municipios más afectados por los ataques a la infraestructura son Tame en las veredas de Santo Domingo, Betoyes, Flor Amarillo y Puerto Gaitán; Fortul donde se encuentra el oleoducto Bicentenario; Arauquita en San Rafael y Brasilia, y Saravena en Puerto Contreras (Isla del Charo y La Playa). Asimismo, el tramo más afectado del oleoducto Caño–Limón y que está controlado por el ELN, es el que se encuentra entre Arauquita, Saravena y Cubará (Boyacá). Para el caso del Bicentenario, el trayecto comprendido entre Tame, Saravena y Fortul es el más golpeado. En el mapa 2 es posible observar la concentración de los ataques entre 2012 y 2014 a nivel de coordenadas en el departamento.

¹⁹⁴ Entrevista realizada en Arauca el 22 de enero de 2015.

¹⁹⁵ Entrevista realizada en Arauca el 21 de enero de 2015.

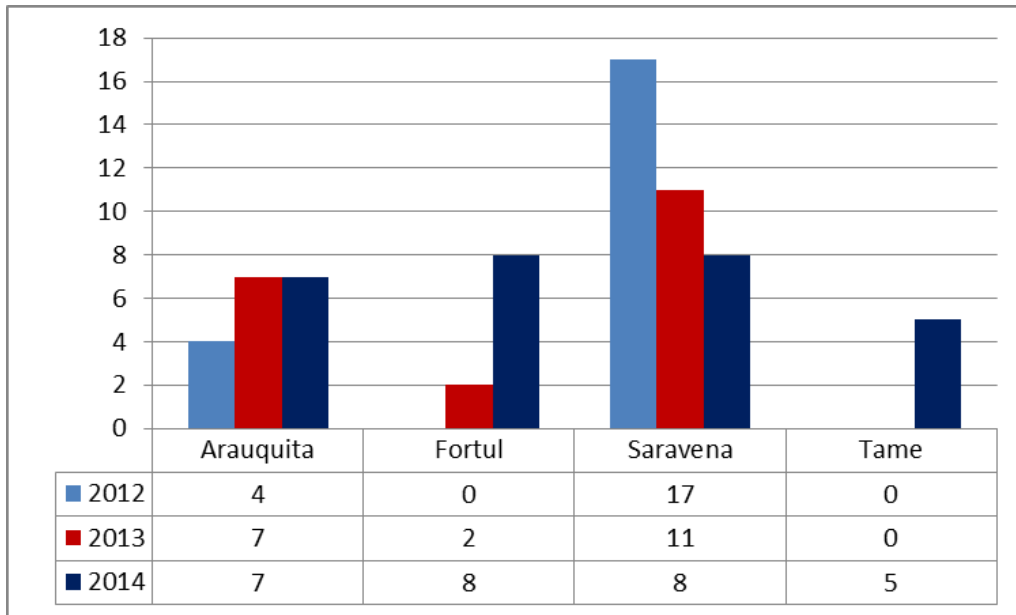
¹⁹⁶ Entrevista realizada en Arauca el 19 de enero de 2015.

¹⁹⁷ Frente al tema de la corrupción en el departamento, el *Índice de Transparencia* realizado por Transparencia por Colombia, el cual mide el nivel de riesgo de Corrupción, muestra que en Arauca el nivel de riesgo bajó de 2004 a 2009. En este sentido, pasó de tener un riesgo alto de corrupción en 2004 (con una calificación de 37,55) a un nivel medio en 2009 (con una calificación de 71,4). Sin embargo, la percepción de gran parte de los entrevistados es que la corrupción institucional sigue siendo muy alta.

¹⁹⁸ Entrevista realizada en Arauca el 22 de enero de 2015.

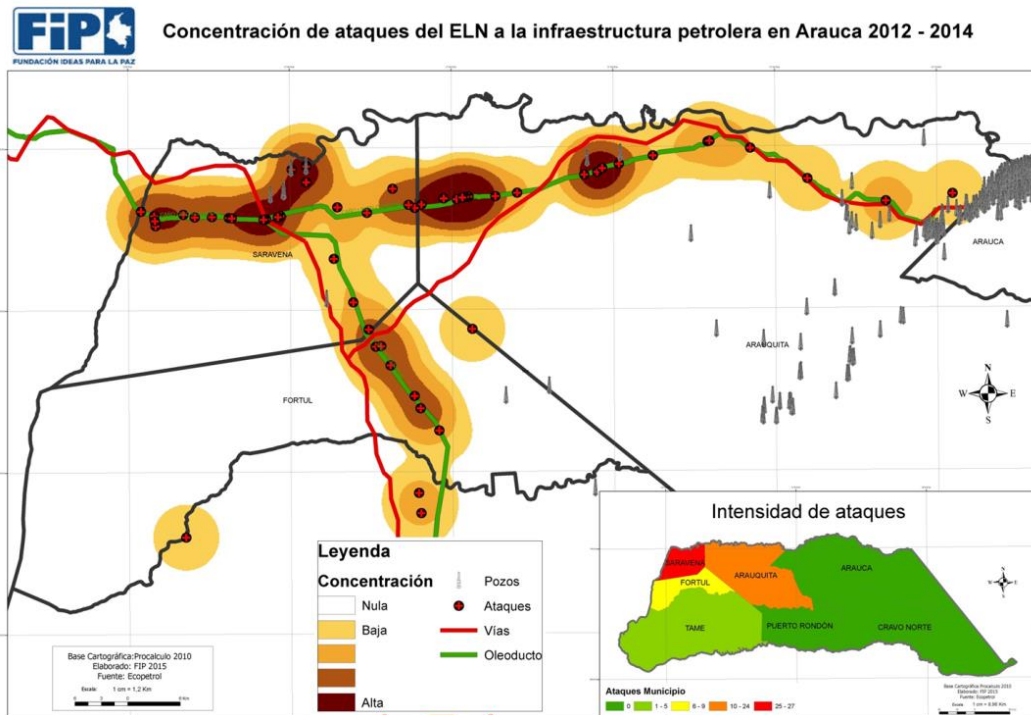
¹⁹⁹ Entrevista realizada en Arauca el 22 de enero de 2015.

GRÁFICA 6. ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA DEL ELN EN ARAUCA 2012-2014



Fuente: Ecopetrol (corte a diciembre 15 de 2014)

MAPA 2. ATAQUES DEL ELN A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA EN ARAUCA 2012-2014



Fuente: Ecopetrol

En esta sección se enfatizó en que el comportamiento de los ataques a la infraestructura petrolera en Arauca está relacionado con los intereses económicos, políticos, sociales y nacionales del ELN. Se observó que detrás de estas acciones se pretende presionar el pago de extorsiones, ejercer

presión política sobre el gobierno, posicionar su agenda política a nivel nacional, incrementar el apoyo social y demostrar poderío militar mediante acciones de bajo esfuerzo militar, afectar militarmente a la fuerza pública y fortalecer su posición frente al gobierno en las posibles negociaciones de paz. Asimismo, el sector de hidrocarburos ha sido fundamental dentro de la estrategia de guerra del ELN, por lo que el desarrollo de esta actividad económica permite entender el accionar de esta guerrilla.

Modalidad de los ataques a la infraestructura petrolera

La cadena de producción de petróleo²⁰⁰ tiene seis fases: exploración, explotación o producción, transporte, refinamiento, almacenamiento y comercialización, siendo la del transporte la más afectada por los atentados que cometen los grupos armados ilegales. Los oleoductos en Colombia tienen una extensión de 4.900 kilómetros²⁰¹, sin contar el Oleoducto Bicentenario y forman una red compuesta por los oleoductos Caño Limón–Coveñas, Colombia, Central de los Llanos Orientales, Alto Magdalena, Ocesa y Bicentenario, que es el más nuevo y del cual se ha construido sólo la primera etapa (ver mapa 3). Asimismo, para el transporte de refinados existe una red de poliductos que llevan los derivados del petróleo desde las refinerías hacia los puertos de exportación y las plantas de almacenamiento y distribución situadas en las zonas de mayor consumo²⁰². En este caso cabe anotar que tanto la red de oleoductos como de poliductos son, en su mayoría, propiedad de Ecopetrol por medio de su filial CENIT.

Los ataques del ELN a la infraestructura petrolera en Arauca han estado dirigidos principalmente a los oleoductos, pero también a carrotanques, pozos e instalaciones de los campos petroleros²⁰³, según lo manifestaron empleados del sector entrevistados para esta investigación. Los datos de Ecopetrol así lo confirman, pues en el caso de Arauca, entre 2012 y 2014, los atentados afectaron en un 67,7% a Caño Limón–Coveñas con un total de 44 acciones y en un 24,6% al Bicentenario, que recibió 16 ataques (ver gráfica 7). No obstante, esta información no tiene en cuenta los ataques a carrotanques.

²⁰⁰ Luego del proceso de contratación y la firma del contrato de explotación, se inicia la *fase de exploración*, con el objetivo de identificar los potenciales yacimientos de hidrocarburos. Una vez se detecta la presencia de hidrocarburos, se lleva a cabo una evaluación que defina la comercialidad del hallazgo y los costos de desarrollo del proyecto, para posteriormente proceder a la obtención de las licencias ambientales. Al obtener la licencia ambiental se inicia el proceso de construcción de la infraestructura necesaria para la extracción y transporte del crudo, y con esto se da paso a la *fase de explotación o producción*, durante la que se extrae el crudo y el gas de los pozos. Después viene la *fase de transporte* del crudo desde los diferentes yacimientos hacia las refinerías para su procesamiento, o puertos para su embarque y exportación. El medio de transporte más utilizado son los oleoductos, aunque en algunos casos se utilizan diferentes tipos de vehículos adaptados para este propósito, como los carro-tanques, que son utilizados principalmente para el transporte del crudo pesado, ya que los oleoductos no tienen las condiciones necesarias para su transporte. Otra de las fases de la cadena de producción petrolera es el *refinamiento*. Este proceso consiste en la transformación del petróleo en diferentes productos con valor agregado y diversos usos. Actualmente, Colombia cuenta con cinco refinerías cuya actividad está bajo el control estatal por medio de Ecopetrol y los precios en las refinerías son regulados por el Gobierno (ver más en: López, Enrique; Montes, Enrique; Garavito, Aarón y Collazos, María M. Op. cit.)

²⁰¹ UPME (2013). Op. cit.

²⁰² UPME (2013). Op. cit.

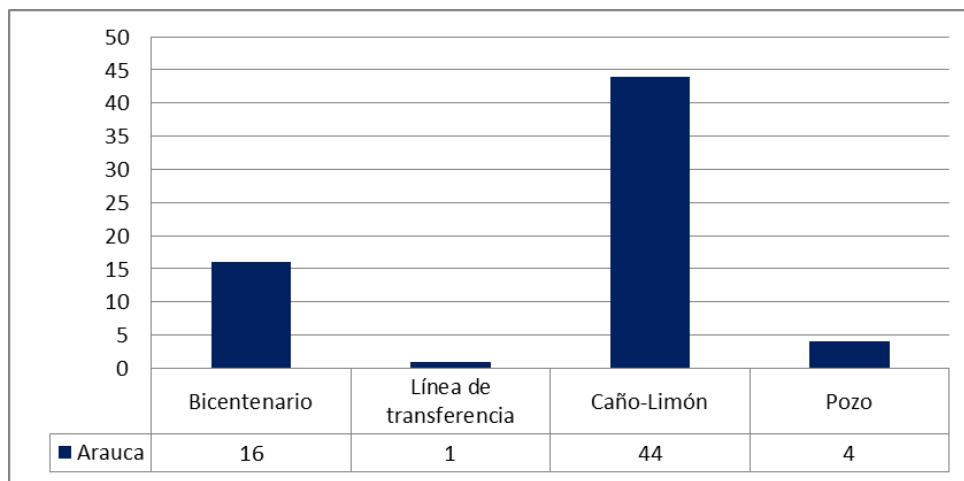
²⁰³ El 30 de julio de 2014 el ELN realizó un ataque con explosivos contra el comedor del campo de la OXY en Arauquita. El resultado de este ataque fueron 13 heridos. (Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-ministerio-de-defensa-pide-onu-condene-acciones-del-articulo-501707>)

MAPA 3. OLEODUCTOS EN COLOMBIA²⁰⁴



Fuente: Ecopetrol

GRÁFICA 7. TIPO DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL ELN EN ARAUCA 2012-2014



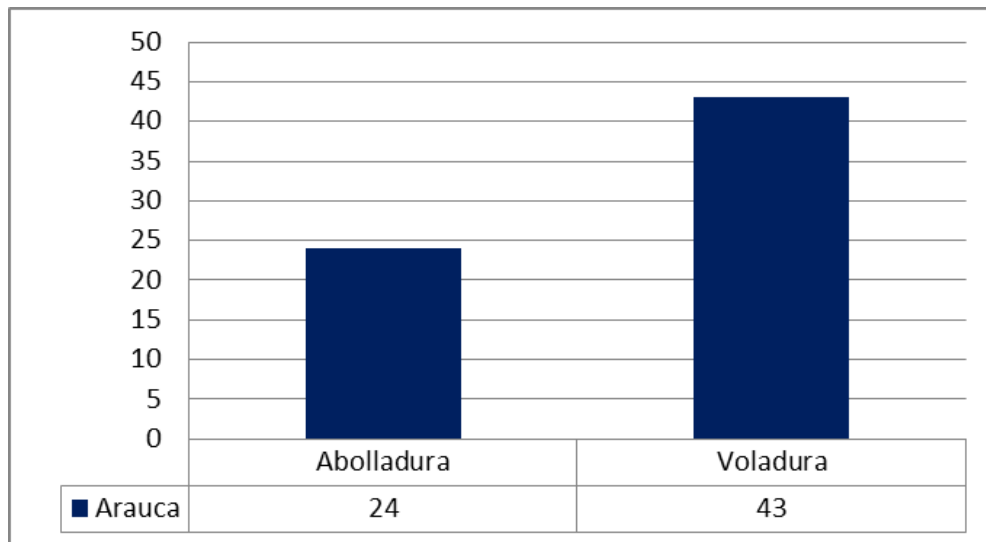
Fuente: Ecopetrol (corte a diciembre 15 de 2014)

Los ataques normalmente se realizan con explosivos, aunque en ocasiones utilizan disparos de fusil para afectar el tubo. Según las entrevistas, la utilización de explosivos o impactos de fusil depende del grosor del tubo y de la altura del oleoducto. Según los datos de Ecopetrol en Arauca,

²⁰⁴ En este mapa no se encuentra el Oleoducto Bicentenario.

entre 2012 y 2014, las voladuras de oleoductos son los tipos de afectación más comunes que equivalen al 64%, con 43 de las 67 acciones, seguido por las abolladuras²⁰⁵ con el restante 36% (23 atentados) de las acciones durante el mismo período (ver gráfica 8).

GRÁFICA 8. TIPO AFECTACIÓN DE ATAQUES ELN A LA INFRAESTRUCTURA EN ARAUCA 2012-2014



Fuente: Ecopetrol (corte a diciembre 15 de 2014)

Durante la investigación se identificó que en “los últimos dos años se ha presentado una reducción abismal en los atentados”, pero “aunque se presentan menos atentados, hay más pérdida en la producción”, según uno de los entrevistados²⁰⁶. Actualmente, los explosivos se instalan delante de las válvulas seccionadoras en la parte baja de las pendientes, con el propósito de regar la mayor cantidad de crudo en un solo ataque²⁰⁷. Este cambio puede mostrar que el ELN se ha adaptado al incremento de la vigilancia de la fuerza pública y, por consiguiente, recurre a acciones más puntuales, que tienen un mayor impacto en la producción. Detrás de esto también estaría una estrategia para continuar presionando a las empresas y ganar mayor visibilidad frente al gobierno.

De acuerdo con personas del sector petrolero, si bien es claro que los ataques son orquestados por los actores armados ilegales, también se debe tener en cuenta la existencia de un “círculo vicioso” con relación a las personas que se contratan para reparar los daños. Según esto, se estarían presentando casos en que civiles tienen el interés de cometer los ataques para que luego los contraten para la reparación. Cabe advertir que los entrevistados no tienen pruebas ni evidencia de que esto esté ocurriendo.

3.5 El impacto de los ataques a la infraestructura petrolera

Según cálculos de Ecopetrol, desde la puesta en operación del oleoducto Caño Limón–Coveñas en 1986 hasta el año 2004, los sabotajes de los grupos armados ilegales produjeron el derrame de

²⁰⁵ Por abolladura se entiende: la depresión o hundimiento del oleoducto producido a causa de un impacto o presión causada por una explosión.

²⁰⁶ Entrevista realizada en Bogotá el 12 de febrero de 2015.

²⁰⁷ Entrevista realizada en Bogotá el 12 de febrero de 2015.

más de 3 millones de barriles de petróleo²⁰⁸. Adicionalmente, los costos de dichos derrames se acercan a los 70 millones de dólares en atención a emergencias, 80 en el valor del crudo derramado, y 60 en actividades de reparación del oleoducto²⁰⁹. Con base en esto, en esta sección se presenta un panorama general del impacto que han generado los ataques a la infraestructura petrolera en Arauca en términos ambientales, sociales y para el sector de hidrocarburos. También se hace referencia a los atentados ocurridos en Norte de Santander, ya que estos afectan considerablemente la situación ambiental y social del departamento de Arauca.

Impacto ambiental

Una dificultad para analizar el impacto ambiental como consecuencia de los ataques a la infraestructura petrolera en Arauca fue el acceso a la información, ya que no se encontraron estudios profundos ni información técnica²¹⁰, y la que puede resultar útil reposa en las oficinas de Corporinoquia, en Yopal, Casanare. Aun así, se logró contactar a dicha oficina, la cual suministró información general utilizada para la construcción de este apartado.

Ahora bien, un primer elemento para tener en cuenta con base en la información recolectada es que el impacto ambiental de los derrames de crudo depende de sus características y de la superficie afectada. En Arauca, los sistemas más perjudicados cuando el oleoducto Caño–Limón sufre atentados son los ríos, caños y ciénagas. Según las entrevistas, el río Arauca y los caños y ciénagas que lo alimentan son las fuentes hídricas más afectadas, al igual que otros cuerpos de agua en distintas zonas de Arauca, Boyacá y Norte de Santander.

Entre 2012 y 2014, según datos de Ecopetrol, de los 69 hechos ocurridos en Arauca, 25 ocasionaron derrames de crudo y 10, derrames e incendios (ver gráfica 10). Es decir, que en más de la mitad de los ataques se generó algún tipo de daño ambiental. En el caso de Norte de Santander, de 22 acciones, 7 causaron derrames y otras 7 derrames e incendios, registrándose entonces daños ambientales en más del 60% de los hechos.

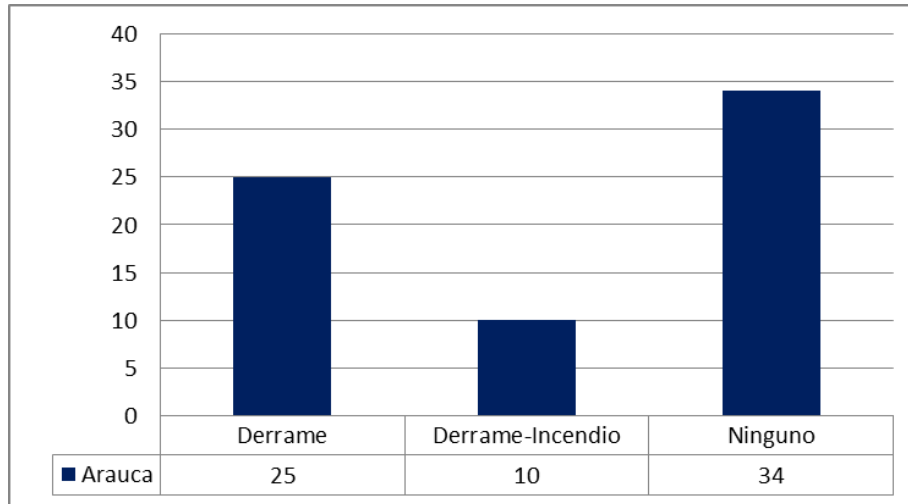
Uno de los efectos concretos de estos daños es la contaminación de los ríos y sus ecosistemas, donde el grado de afectación del derrame depende de la densidad del crudo derramado, es decir, su peso en un volumen determinado. Si la densidad es más alta que la del agua, caerá al fondo como lo hacen algunos crudos pesados afectando significativamente el ecosistema y dificultando el proceso de recolección. De lo contrario flotará como lo hace la gasolina.

²⁰⁸ La cifra registrada equivale a más de 10 veces la cantidad de petróleo derramado por el Exxon Valdez en Alaska en 1989, que fue considerado hasta mediados del dos mil como uno de los más grandes desastres ecológicos de esos años. De la cantidad derramada en esos años en el país, sólo el 1% correspondió a incidentes diferentes a los ataques de los grupos guerrilleros (ver más en: <http://ioscproceedings.org/doi/pdf/10.7901/2169-3358-2005-1-571>)

²⁰⁹ Miranda, Darío y Restrepo, Ricardo. “Los derrames de petróleo en Ecosistemas tropicales – impacto, consecuencias y prevención. La experiencia de Colombia”. *International Oil Spill Conferencie Proceedings*: May 2005, vol. No. 1, pp. 571-575. Disponible en: <http://ioscproceedings.org/doi/pdf/10.7901/2169-3358-2005-1-571>

²¹⁰ Durante la investigación se encontró un artículo de Darío Miranda y Ricardo Restrepo que esboza brevemente las afectaciones medioambientales del derrame de crudo. El artículo es: Miranda, Darío y Restrepo, Ricardo (2005). “Los derrames de petróleo en Ecosistemas tropicales – impacto, consecuencias y prevención. La experiencia de Colombia”. *International Oil Spill Conferencie Proceedings*: May 2005, vol. No. 1, pp. 571-575. Disponible en: <http://ioscproceedings.org/doi/pdf/10.7901/2169-3358-2005-1-571>

GRÁFICA 9. TIPO DE DAÑO AMBIENTAL DE LOS ATAQUES DEL ELN A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA EN ARAUCA Y NORTE DE SANTANDER 2012-2014



Fuente: Ecopetrol (corte a diciembre 15 de 2014)

En el caso del derrame en cuerpos de agua dulce, como el río Arauca, dependiendo de la densidad del crudo, la mancha de hidrocarburos puede llegar a impedir del todo el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el agua²¹¹. Asimismo, disminuye la penetración de la luz, lo que reduce al mínimo o paraliza la producción de oxígeno de los organismos fotosintéticos y genera un cambio composicional de las especies del ecosistema original²¹², limitando el aporte de oxígeno y alimento al ecosistema.

Del crudo derramado que no es recogido, gran parte se evapora y se descompone en la atmósfera en un proceso conocido como fotooxidación, otra se disuelve en el agua. La evaporación y penetración del hidrocarburo dependen de la viscosidad, cantidad vertida, temperatura y humedad²¹³. La disolución en el agua pone en peligro la flora y fauna (biota) que reside en el medio acuático, debido a que afecta la calidad del agua y, por lo tanto, la calidad de vida de los animales y personas que la consumen²¹⁴.

Los derrames también tienen efectos sobre la capa terrestre porque impiden el intercambio gaseoso entre el suelo y la atmósfera, lo que genera serios daños sobre la capa vegetal. El vertimiento de crudo en el suelo “deteriora los procesos bioquímicos, alterando su estructura, composición y grado de fertilidad, dando como resultado la muerte de micro flora y micro fauna”²¹⁵, lo que afecta significativamente la composición, estructura y fertilidad del suelo²¹⁶. Sobre la capa vegetal, el vertimiento de hidrocarburos afecta su capacidad de producción y regulación, además de incidir la genética de las plantas. Esto perjudica directamente la viabilidad del ecosistema, la fertilidad y la cadena alimentaria.

²¹¹ *Ibíd.*

²¹² Miranda, Darío y Restrepo, Ricardo. “Los derrames de petróleo en Ecosistemas tropicales – impacto, consecuencias y prevención. La experiencia de Colombia”. *International Oil Spill Conference Proceedings*: May 2005, vol. No. 1, pp. 571-575.

²¹³ Corporinoquia (2015). *Op. Cit.*

²¹⁴ Corporinoquia (2015). *Op. Cit.*

²¹⁵ Corporinoquia (2015). *Op. Cit.*

²¹⁶ *Ibíd.*

El crudo también tiene efectos nocivos sobre la fauna ya que afecta el hábitad, la salud y la genética de los animales²¹⁷. Los invertebrados presentes bajo la superficie, que cumplen un importante papel en el proceso de formación del suelo, mueren rápidamente por falta de oxígeno y porque su desplazamiento es lento y no alcanzan a escapar cuando se producen este tipo de hechos²¹⁸. A su vez, los peces mueren por asfixia a causa del taponamiento de sus vías respiratorias, pero también su sensibilidad se puede ver inhibida debido a alteraciones de su comportamiento. De igual manera, organismos como réptiles, aves y mamíferos que dependen en gran medida de las ciénagas para su alimento, refugio y desarrollo de parte de su ciclo de vida, también se ven afectados porque quedan atrapados en las manchas de petróleo y mueren por la exposición a los altos niveles de toxicidad del crudo²¹⁹.

Los incendios producidos por los atentados acaban con el ecosistema terrestre, afectando seriamente la fauna y la flora. La emisión de gases, producto de la quema controlada del crudo o incendios involuntarios, genera emisiones atmosféricas de gases tóxicos nocivos para la salud. Este tipo de acciones afecta la calidad del aire y el clima²²⁰, lo que se traduce en un impacto negativo en las condiciones de vida de las especies del ecosistema y las comunidades cercanas.

En general, se puede decir que el derrame de crudo produce contaminación aguda que puede llevar incluso a la muerte de importantes organismos para el equilibrio del ecosistema debido a la alta toxicidad del crudo²²¹. “A largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y de alimentación de todos los organismos del ecosistema”²²².

Impacto social

Los derrames de crudo también tienen impactos sobre la población, ya que el agua de consumo humano –que de hecho se consume sin ningún tipo de tratamiento– se abastece de acueductos cuyas fuentes son ríos, continuamente contaminados a causa de los atentados. Estos derrames también han dejado sin agua innumerables veces a las comunidades de las zonas aledañas a los ríos, a lo que se suman las consecuencias sobre la salud. Un estudio de OCHA además muestra que los ataques y derrames de crudo afectan la fauna del río, perjudicando la pesca, actividad económica de las familias y base alimentaria de las comunidades²²³.

Según una de las entrevistas realizadas por la FIP, “el río Arauca (afectado por los atentados en Norte de Santander) y la Isla del Charo han sido priorizados por el gobierno debido a la inviabilidad del agua por los atentados”²²⁴. Otros manifestaron que el derrame de crudo y los incendios también ha afectado a los animales y las fuentes de agua para el riego y el ganado, así como la capa vegetal de los suelos aptos para cultivo. “Las voladuras generan el derrame de mucho crudo y

²¹⁷ *Ibíd.*

²¹⁸ Miranda, Darío y Restrepo, Ricardo. “Los derrames de petróleo en Ecosistemas tropicales – impacto, consecuencias y prevención. La experiencia de Colombia”. *International Oil Spill Conference Proceedings*: May 2005, vol. No. 1, pp. 571-575.

²¹⁹ Miranda, Darío y Restrepo, Ricardo. “Los derrames de petróleo en Ecosistemas tropicales – impacto, consecuencias y prevención. La experiencia de Colombia”. *International Oil Spill Conference Proceedings*: May 2005, vol. No. 1, pp. 571-575.

²²⁰ Corporinoquia (2015). *Op. cit.*

²²¹ *Ibíd.*

²²² Corporinoquia (2015). *Op. cit.*

²²³ Equipo Humanitario Colombia (OCHA). *Municipio Saravena*. Colombia-Informe Flash MIRA. 10 de abril de 2014. <file:///C:/Users/imarin/Downloads/140410%20Flash%20MIRA%20Frontera%20Arauca.pdf>

²²⁴ Entrevista realizada en Arauca el 22 de enero de 2015.

las comunidades se ven afectadas porque donde cae el crudo no nace pasto, se contamina el río y las fuentes de agua”²²⁵. También explican que la contaminación de los ríos ha perjudicado considerablemente la pesca, fuente de trabajo y alimento para las comunidades cercanas al río: “La voladura del tubo ha afectado a las asociaciones de pescadores de Arauca, Saravena y Arauquita porque ha matado muchos peces y baja la pesca”²²⁶.

Por otro lado, las voladuras de los tubos también afectan las condiciones de movilidad de las comunidades al punto que se presentan situaciones de confinamiento no sólo por las condiciones de seguridad posteriores a los atentados, sino también porque la fuerza pública restringe la movilidad de las personas para reparar los daños. Es más, también se producen desplazamientos como consecuencia de los incendios y el derrame de crudo, los cuales, no obstante, son temporales mientras se hacen las reparaciones necesarias y se limpia la zona afectada. Ejemplo de esto fue un atentado al Oleoducto Bicentenario en agosto de 2014 en el municipio de Fortul que, según un habitante de la región, “afectó al ganado y a las personas que se encontraban viviendo cerca (...) debieron ser refugiados en un hotel porque no se podían quedar en sus viviendas”²²⁷.

Finalmente, otra consecuencia de los ataques a la infraestructura petrolera es la siembra, por parte de los grupos guerrilleros, de minas antipersonal en los lugares de los atentados. Como ya se dijo anteriormente, estas son utilizadas para sorprender a miembros de la fuerza pública que se disponen a hacer las reparaciones, pero también afectan a los técnicos de las petroleras y a las comunidades que habitan o se desplazan cerca del tubo.

Impacto al sector de hidrocarburos

Las consecuencias para el sector de hidrocarburos y para la economía del país van más allá de la cantidad de crudo que se derrama y se deja de transportar. En estos casos se presenta una pérdida en la producción diferida²²⁸. Cuando ocurre un ataque a un oleoducto se cierran las válvulas seccionadoras para detener el derrame, por lo que se interrumpe el flujo de crudo y en el momento en que se llenan las reservas de almacenamiento se debe detener el bombeo y, por consiguiente, se dejan de producir los barriles correspondientes al periodo durante el cual se suspendió el flujo.

Según la Agencia Colombiana de Petróleo (ACP), en 2013 la industria tuvo pérdidas por 700 mil millones de pesos por este tipo de ataques. Entre enero y agosto de 2014 las pérdidas fueron por más de US\$500 millones y los costos de la reparación llegaron a los 60 mil millones de pesos²²⁹. El presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, indicó que entre enero y septiembre de 2014 se dejaron de producir unos 17 mil barriles por los ataques²³⁰. Además, según un reporte de Ecopetrol, el transporte de crudo en 2014 disminuyó un 3,8% en comparación con el segundo trimestre de

²²⁵ Entrevista realizada en Arauca el 20 de enero de 2015.

²²⁶ Entrevista realizada en Arauca el 20 de enero de 2015.

²²⁷ Entrevista realizada en Arauca el de enero de 2015.

²²⁸ Entrevista a personal del sector de hidrocarburos el 11 de noviembre de 2014.

²²⁹ InSight Crime. “Pérdidas de US\$500 millones muestran el impacto de la guerrilla sobre la industria petrolera en Colombia”. 21 de agosto de 2014. <http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/perdidas-500-millones-muestran-impacto-guerrilla-industria-petrolera-colombia>

²³⁰ El País. “En lo corrido del año se han presentado 1.400 ataques a infraestructura petrolera”. Septiembre 16 de 2014. <http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/corrido-ano-han-presentado-1400-ataques-infraestructura-petrolera>

2013, debido en gran parte a la ofensiva de la guerrilla contra el oleoducto de Caño Limón y al bloqueo de los U'wa.

Uno de los ataques realizados por el ELN de mayor impacto se presentó el 25 de marzo de 2014, cuando el grupo guerrillero dinamitó un tramo del oleoducto Caño Limón–Coveñas en zona rural de Toledo, lo que generó derrame de crudo y contaminación de fuentes hídricas en territorio U'wa. Esta comunidad indígena, afectada por el derrame (población que ha estado en desacuerdo con la explotación petrolera en su territorio desde hace varios años)²³¹ se opuso al ingreso de las autoridades y los técnicos, impidiendo la reparación del tramo dañado durante 40 días, lo que afectó considerablemente la producción debido a que los tanques de almacenamiento se encontraban en su máxima capacidad²³². Durante este lapso se dejaron de mover 2,4 millones de barriles²³³.

4. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN FRENTE A LOS ATAQUES A LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA

Como se describió en la última sección, los atentados contra la infraestructura petrolera, principalmente a los oleoductos, generan importantes impactos económicos, sociales y ambientales. Esto ha generado la necesidad de implementar protocolos y procedimientos que permitan prevenir la ocurrencia de estos hechos, pero también la mitigación de los daños causados, en la medida en que los atentados contra los oleoductos se siguen presentando.

El componente de prevención se ha transformado en los últimos 10 años. Hoy se ha delegado la seguridad en su totalidad al Estado colombiano, mientras que la seguridad privada se encarga de proteger el interior del complejo petrolero frente a riesgos de delitos menores²³⁴. Antes, ocurría lo contrario, ya que se aplicaba un modelo de seguridad multiactor que contemplaba el pago a organismos de seguridad privada y a actores ilegales (mediante “cuotas de seguridad”) dependiendo del control que tuvieran en la zona, tal como ocurrió en Arauca con el ELN.

En la actualidad, “la función de protección, contención y guerra es asumida por la fuerza pública”²³⁵, modelo que se puso en marcha bajo la directriz de la Política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia, que buscaban la recuperación del control de los territorios para generar confianza inversionista por medio de la promoción de la seguridad como generadora de crecimiento económico y rentabilidad social. Con dicho propósito, desde 2003 se formaron Brigadas cuya misión ha sido contribuir a la seguridad de la actividad petrolera en el área de operaciones de las compañías, incluidas las zonas de exploración, explotación y transporte. Con

²³¹ Los U'wa se vienen enfrentado a las petroleras desde 1992, cuando la Occidental compró los derechos del bloque Samoré (que ahora está dividido en los bloques Sirirí y Catleya) ubicados dentro de su resguardo. Después de una larga lucha, finalmente la OXY salió del territorio U'wa en 2001, pero la situación se ha vuelto a complicar desde 2012 cuando Ecopetrol inició un proyecto de exploración de gas en el bloque Magallanes, ubicado en Toledo. A raíz del bloqueo en marzo de 2014, Ecopetrol suspendió el proyecto hasta verificar que no está generando ningún tipo de afectación al ambiente, según fue comunicado por el ministerio de Minas y Energía. (ver más en: <http://www.ddhhcolombia.org/html/noticias%20ddhh/COMUNIDADINDGEU.pdf>)

²³² El Espectador. “U'wa y Gobierno llegan a acuerdo para reparar oleoducto Caño Limón – Coveñas”. Mayo de 2014. <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/uwa-y-gobierno-llegan-acuerdo-reparar-oleoducto-cano-li-articulo-489926>

²³³ Revista Dinero. “No solo violencia”. Agosto 21 de 2014. <http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/causas-caida-accion-ecopetrol/200021>

²³⁴ González Posso, Camilo (2011). Op. cit.

²³⁵ González Posso, Camilo (2011). Op. cit. p. 36

este cambio, en la actualidad la prevención de atentados contra la infraestructura petrolera se basa en una serie de convenios o “Acuerdos de Protección Militar” entre las compañías y el Ministerio de Defensa, “mediante los cuales se dedican unidades de las Fuerzas Armadas a la exclusiva tarea de seguridad de las operaciones de la empresa”²³⁶ y la infraestructura.

Estos acuerdos o convenios consisten en que las compañías colaboran con el Ministerio de Defensa con inversiones exclusivamente logísticas para que el Ejército preste un servicio de protección²³⁷. Por ejemplo, ayudan con alimentos o insumos médicos para tratar soldados heridos en combate²³⁸. Estos convenios han generado una fuerte articulación y comunicación entre el sector privado y el de defensa, por lo que el gobierno nacional creó el Centro de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI), entidad que se encarga de coordinar los protocolos de seguridad y el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad pública, instituciones estatales y el sector privado.

Un ejemplo de lo anterior es que el COPEI está trabajando estrechamente con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)²³⁹, con el objetivo de coordinar las acciones que vienen realizando las diferentes empresas con la fuerza pública, y vigilar que los procedimientos de seguridad se estén cumpliendo para evitar atentados y afectaciones por parte de los actores ilegales.

Sumado a lo anterior, también se han tomado otras medidas para la prevención de ataques a la infraestructura como la incorporación de “drones” o aviones no tripulados que sobrevuelan para vigilar los oleoductos. Asimismo, la construcción del Oleoducto Bicentenario ha tomado medidas especiales para la prevención de ataques, como construir el oleoducto bajo tierra protegido con placas de concreto, acciones que no han tenido mucho éxito. Existen otra serie de medidas que no fueron reveladas por temas de seguridad²⁴⁰.

En Arauca, las acciones para hacer frente a los ataques a la infraestructura consisten en: la creación de bases militares en los corredores de movilidad de las compañías, fortalecimiento de las medidas de seguridad en el oleoducto Caño Limón-Coveñas y en los diferentes epicentros de explotación petrolera (OXY, Repsol y Ecopetrol); la implementación de bases de patrullaje en lugares estratégicos y la creación de batallones contraguerrilla que aseguran las áreas periféricas de las estaciones, plantas, pozos, oleoductos y exploraciones. A esto se suma el Plan Escudo –en cabeza de aviación del Ejército con base en Saravena– que en coordinación con la Fuerza Aérea ha desplegado medidas para la vigilancia de la infraestructura, el fortalecimiento de los medios técnicos, y de comunicaciones entre la fuerza pública y las empresas²⁴¹.

A pesar de esta serie de medidas de prevención y vigilancia, los atentados a los oleoductos e infraestructura continúan, por lo que es necesario tener un plan de mitigación o contingencia para disminuir los daños ambientales y sociales que conllevan este tipo de acciones. Una media es el

²³⁶ González Posso, Camilo (2011). Op. cit. p. 37

²³⁷ González Posso, Camilo (2011). Op. cit.

²³⁸ Entrevistas realizadas en Bogotá entre noviembre y diciembre de 2014 a empresas del sector, funcionarios públicos y expertos en la materia.

²³⁹ La ANH es la entidad encargada de vigilar que las empresas cumplan con las medidas de seguridad para su operación, estipuladas en el contrato de explotación con el gobierno nacional.

²⁴⁰ Entrevistas realizadas en Bogotá entre noviembre y diciembre de 2014 a empresas del sector, funcionarios públicos y expertos en la materia.

²⁴¹ Triviño, José Saúl (2013). Medidas de seguridad física en prevención y acciones de reparación de los atentados terroristas al oleoducto en la región del Sarare - Arauca (Colombia). Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia.

decreto 321 de 1999, por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia Contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres (PNC) y es el marco rector de las medidas de contingencia en caso de derrame de crudo para contrarrestar los impactos que se puedan sufrir tanto económica como social y ambiental.

El Plan de Contingencia establece estrategias y protocolos de respuesta para la atención de incidentes²⁴², en los que se requiere la intervención de personal de emergencia para evitar o minimizar la pérdida de vidas o el daño a propiedades y/o a los recursos naturales. El Plan define responsabilidades de quiénes intervienen en la operación, provee información básica sobre los insumos y recursos disponibles, ya sea que el evento se presente durante una actividad estacionaria (almacenamiento, procesos, cargue y descargue) o durante el transporte²⁴³.

En este decreto también se define el responsable de la atención del derrame, es decir, de la reparación, mitigación e indemnización. En este caso, se responsabiliza al “responsable de la instalación, de la operación, el dueño de la sustancia o actividad de donde se originó el derrame”²⁴⁴. Esto quiere decir que en el caso de los atentados contra los oleoductos, los responsables de la reparación de los daños son las empresas transportadoras del crudo, como CENIT (filial de Ecopetrol) y Ecopetrol en caso de un derrame producido a causa de su operación. No obstante, en la ley se evidencia una zona gris donde no se estipula de manera concreta las medidas y responsabilidades que tiene cada actor en los atentados contra la infraestructura, al ser una consecuencia del conflicto armado, por lo que sobrepasan las capacidades y tareas de las empresas productoras y transportadoras.

Frente a este punto, los entrevistados manifestaron que las instituciones y organismos del Estado no hacen parte del proceso de reparación y mitigación. Las empresas son las encargadas de la reconstrucción del tubo y de la limpieza superficial del lugar, pero se limitan exclusivamente a estas tareas. Esto genera que no haya una reparación integral frente a los daños medioambientales y sociales causados por el derrame de crudo, en la medida en que, como manifiestan los entrevistados, son consecuencia del conflicto y no de la operación. De acuerdo con esto, reparar estos daños no es competencia de las compañías. En este aspecto, cabe mencionar que el Estado ha reparado a algunas comunidades, pero no es una acción sistemática o regulada por la ley.

El protocolo de contingencia en los casos de atentados a los oleoductos tiene tres fases: i) medidas de seguridad, por medio de las cuales las Fuerzas Militares establecen las condiciones de seguridad necesarias para que las empresas puedan entrar a determinadas zonas, que en su mayoría son áreas de conflicto; ii) entrada de los técnicos de las empresas para la reconstrucción del tubo y el restablecimiento del bombeo y iii) limpieza de la zona donde se produjo el derrame del crudo, para la cual se subcontratan empresas o población local con experiencia en estas tareas.

²⁴² Se entiende Incidente como un evento natural o causado por el hombre que produzca el derrame de crudo.

²⁴³ Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín, CORNARE, CORANTIOQUIA y CORPOURABÁ (2013). Términos de referencia para la elaboración del plan de contingencia para el manejo y transporte de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Disponible en http://www.cornare.gov.co/Tramites-Ambientales/Planes/Plan-de-contingencia/derrames/Lineamientos_PDC_Vf.pdf

²⁴⁴ *Ibíd.* p. 6

REFLEXIONES FINALES

Los atentados a la infraestructura han sido para el ELN una herramienta que busca alcanzar objetivos en el plano económico, sociopolítico y militar de su lucha armada. De ahí que los ataques deben ser entendidos más allá de una racionalidad o motivación económica. Estos persiguen intereses en el ámbito sociopolítico, como la obtención de apoyo social y la necesidad de posicionar su agenda política frente a la explotación de hidrocarburos, y en lo militar, para fortalecer su posición frente al gobierno y como instrumento táctico para golpear a la fuerza pública.

El caso de Arauca muestra que el sector de hidrocarburos ha sido fundamental dentro de la estrategia de guerra múltiple del ELN. Por esto, el comportamiento de los ataques contra la infraestructura está relacionado con los diferentes intereses de esta guerrilla, donde el aumento y la disminución de los ataques están asociados a los cambios en el contexto y los propósitos inmediatos de la organización.

Desde los años ochenta, el ELN ha utilizado los atentados como una forma de presionar a las empresas petroleras para el pago de extorsiones. También para fortalecer sus bases sociales sirviendo de intermediario en la generación de empleo para las comunidades y en la búsqueda de una mayor inversión de las ganancias provenientes de actividades petroleras. Además, de la reivindicación de las exigencias sociales que han surgido de la explotación de hidrocarburos en el departamento. A su vez, en la actualidad, el ELN utiliza los ataques para mostrarse como una guerrilla fortalecida militarmente y un actor aún relevante y vigente de cara a las negociaciones de paz con el gobierno.

Frente a la situación actual del ELN en el departamento, esta investigación de la FIP identificó que en los últimos cuatro años, la guerrilla ha retomado varias de las estrategias que la caracterizaron en periodos anteriores, ubicándola nuevamente como el grupo armado ilegal predominante en Arauca. Sin embargo, debido al desprestigio en el que quedó después de la violenta disputa con las FARC entre 2005 y 2010, y al rechazo de los araucanos frente a los actores armados después de largos años de conflicto, el ELN ya no cuenta con la misma influencia sociopolítica de antes. Esto ha provocado que hoy la guerrilla no tenga la suficiente injerencia en la política local y regional para acceder a los recursos provenientes de las regalías petroleras, lo que a su vez, la ha obligado a incrementar la presión sobre el sector petrolero para obtener recursos por medio de extorsiones y secuestros. Lo anterior, sumado a la coyuntura política de negociaciones de paz donde el ELN parece tener intenciones de entrar a participar, explica el incremento de los ataques a la infraestructura en los últimos dos años, con los que busca mostrarse fuerte y vigente.

En cuanto a la base social del ELN, es evidente que independientemente de si ha logrado o no legitimidad en algunos sectores sociales, este grupo guerrillero mantiene sintonía con gran parte de la población respecto a su oposición a las políticas de extracción petrolera y a los impactos que se derivan de esta. Este discurso ha mantenido aspectos esenciales a lo largo de los años, al tener como base principios antiimperialistas y nacionalistas. El ELN critica el hecho de que la actividad petrolera beneficie principalmente a las multinacionales, e insta por un cambio de modelo político y económico que asegure un mayor bienestar para las comunidades.

El encuentro entre el discurso del ELN y la posición de ciertas comunidades alrededor del tema petrolero, se explica por la deuda histórica que tiene la industria petrolera con parte de la población araucana, a lo que se suma el mal manejo del gobierno colombiano a las ganancias provenientes de esta actividad y la represión contra las expresiones sociales que buscan un mayor bienestar para las comunidades. Por esto, se considera esencial reconocer esta deuda y que sus elementos constitutivos sean incluidos en cualquier ejercicio de reconciliación y de construcción de paz en un eventual período de postconflicto.

Finalmente, ya que los atentados contra los oleoductos generan importantes impactos económicos, sociales y ambientales, se han puesto en marcha protocolos y procedimientos, aumentado el pie de fuerza militar para cuidar los oleoductos e implementado tecnología como los “drones” y otra serie de medidas de seguridad para prevenir la ocurrencia de estos hechos. Sin embargo, estas medidas no han sido del todo eficaces debido a que se siguen presentando voladuras y ataques contra la infraestructura petrolera.

Por otra parte, las medidas de mitigación de los daños causados por el derrame de crudo producto de estos ataques son también insuficientes. Si bien es cierto que los protocolos de contención y atención a los daños están claramente establecidos y funcionan en la práctica, la falta de un claro responsable de la reparación de los daños sociales y ambientales genera la imposibilidad de atender de forma integral los impactos causados. De ahí la necesidad de legislar en este tema y generar mecanismos reales para la reparación de los daños causados a las comunidades y al medio ambiente.